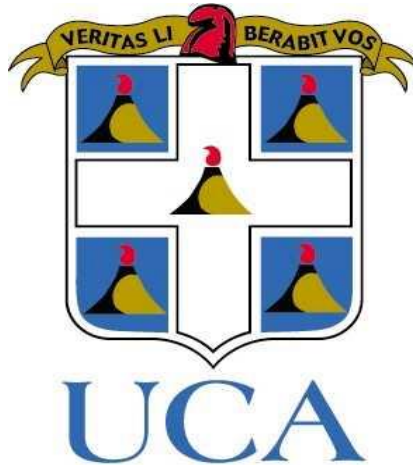


**UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS**



Trabajo de investigación para optar al título de
Máster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal

**EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS
AMBIENTALES**

Autor: Frank Augusto Flores Pérez
Tutor: Dr. Róger Salvador Alfaro Cortez

Managua, junio 2010

ACTA DE APROBACIÓN

El suscrito tutor (a) hace constar:

Que el estudiante: Frank Augusto Flores Pérez con carné número 89028841 ha elaborado su trabajo de investigación de conformidad con lo estipulado en la “*Normativa para la Elaboración del Trabajo de Investigación en los Programas de Especialización y Maestrías*”, tanto en las consideraciones técnicas en cuanto al fondo del tema, así como la estructura y metodología al tenor de los arts. 11, 12 y 13 de dicha normativa.

Por lo tanto al criterio de este tutor, el presente Trabajo de Investigación reúne los requisitos de fondo y forma que permiten a la *Coordinación de Postgrados y Formación Continua* proceder a su respectiva revisión normativa, como requisito previo a la programación de su defensa.

Dado en la ciudad de Managua, a los 24 días del mes de mayo del 2010.



Róger Alfaro Cortez

Resumen

En Nicaragua los delitos ambientales son de reciente regulación, primero con la entrada en vigencia de la Ley Especial de Delitos Contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales Ley No. 559 y posteriormente con la entrada en vigencia del Código Penal, Ley No. 641, por lo cual es necesario dar solución jurídica acertada a todas aquellas acciones ejercidas por afectaciones al medio ambiente conforme lo regula nuestra legislación penal. Es por ello que en el presente trabajo se analiza en qué consisten los delitos ambientales, cómo se encuentran regulados y qué medios de prueba se requiere para su demostración. Se estudian además los tipos penales ambientales de mayor incidencia por las condiciones socio geográficas de nuestro país como son la contaminación de suelos y subsuelo y los delitos forestales. Por otra parte, valorando que nuestro ordenamiento penal ambiental se rige bajo el modelo mixto (accesoriedad relativa) en el que la regulación penal está relativamente subordinada a la actuación administrativa, también se abordan los instrumentos y características para la gestión ambiental y las instancias administrativas con funciones en materia ambiental, temas que son necesarios para una correcta aplicación de las normas penales en blanco que contemplan los delitos ambientales.

Índice

1. Delitos ambientales; 2. Régimen jurídico de los delitos ambientales; 3. La Constitución y el Derecho Ambiental; 4. El Estado como víctima en los delitos ambientales; 5. Bien jurídico protegido en los delitos ambientales. 6. La prueba en los tipos penales ambientales. 7. Acción procesal penal en los delitos ambientales. 8. La acusación en los delitos ambientales. 9. Acusación por delito de aprovechamiento ilegal de recursos naturales. 10. Comentarios a acusación por delito ambiental. 11. La contaminación de suelo y subsuelo. 12. Delitos forestales. 12.1. Instituciones vinculadas en la investigación de delitos forestales. 12.2. Corte, transporte y comercialización ilegal de madera. 12.3. Incendios forestales y quemas. 12.4. Tala rasa y veda forestal. 12.5. Tala en vertientes y pendientes. 12.6. Acusación por delito forestal. 13. Instrumentos para la gestión ambiental. 14. Características de la gestión ambiental. 15. Instancias administrativas con funciones en materia ambiental. 16. Conclusiones. 17. Recomendaciones.

1. Delitos Ambientales

Para interpretar correctamente los delitos ambientales es necesario tomar en cuenta la característica interdisciplinaria del Derecho Ambiental la cual nos lleva a la elaboración de diversos mecanismos jurídicos de protección, involucrando tanto al derecho público como al privado. Por ello la tipificación del ilícito ambiental y su aplicación no ha sido nada fácil ya que éste está creado no solo bajo preceptos jurídicos sino bajo conceptos científicos, sociales e incluso económicos.

No todos los factores naturales deben estar sometidos a la tutela específica que realiza el denominado Derecho Ambiental; solo aquellos que tengan una decisiva importancia para el ser humano y el resto de los seres y sean susceptibles de intervenciones, teniendo las siguientes características:

- Trascendencia básica para la vida, en cuanto que sin ellos seria imposible la existencia animada en la biosfera.
- Comportamiento dinámico en cuanto se integran en los distintos sistemas naturales de los que forman parte, interaccionado a su vez entre si.
- Posibilidad de que la incidencia de conductas humanas sobre ellos, con fundamento económico excedan de su capacidad de auto regeneración.
- Énfasis consiguiente preventivo y subsidiariamente represivo y compensador de los derechos subjetivos vulnerados y de los ecosistemas degradados.

El principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo dispone que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados. La efectiva aplicación del Derecho Ambiental requiere un acceso efectivo a los procesos judiciales. Para tal efecto quien ejerce acción por delitos ambientales debe fundamentalmente dirigir su objetivo a la defensa del derecho fundamental al ambiente sano y a la recuperación y defensa misma del recurso natural. Un importante componente del acceso a la justicia es la interpretación de la legitimación que evoluciona en materia ambiental

desde la tradicional legitimación directa subjetiva hasta una legitimación ampliada a toda persona con el derecho a un ambiente sano¹.

El origen y evolución del Derecho Ambiental es realmente *sui géneris* por necesidad socio-jurídica. Esto se debe a la realidad social innegable de la existencia de grandes problemas ambientales en todos los niveles, que acechan a la humanidad entera y que -inevitablemente- el ser humano y la sociedad organizada buscan solucionar a corto, mediano y largo plazo, para obtener una mejor calidad de vida; o bien, la estructuración de un modelo de desarrollo humano sostenible, requiriendo necesariamente para ello, de normas jurídicas que obliguen a la sociedad a realizar o no, determinadas acciones.

Tomando en consideración que los fines esenciales de toda sociedad se cumplen por medio del establecimiento de instrumentos jurídicos creados sobre la base del interés colectivo y el bien común, por ello las leyes penales ambientales se hallan en el más alto de los valores vinculados a los intereses colectivos y al bien común por ser el ambiente un bien jurídico colectivo.

En este ámbito El Derecho Penal en cuanto instrumento protector del ambiente, es auxiliar de las previsiones administrativas y por si solo carece de aptitud para ser un arma eficaz frente a las conductas de efectos negativos para el entorno en general, este Derecho no es evidentemente el único con que cuenta el ordenamiento jurídico

¹ En este sentido, PEÑA CHACON, M., (*Legitimación Procesal en el Derecho Ambiental, en Revista de Direito Ambiental, año 8, enero-marzo 2003, numero 29, Brasil, p. 49*) señala que según el esquema tradicional una persona para detentar legitimación con el fin de accionar dentro de un proceso judicial, necesita al menos, ser titular de un derecho subjetivo o un interés público, pero este esquema se desprende cuando a través de un interés derivado de una norma jurídica, se faculta a cualquier sujeto en igualdad de condiciones para la defensa de la legalidad. De esta forma el demandante queda facultado de accionar sin necesidad de invocar lesión alguna de un derecho subjetivo ni un interés legítimo, al encontrarse legitimado procesalmente para actuar por una norma jurídica específica naciendo así la denominada acción popular mediante la cual el ordenamiento, cuando se trata de cierto tipo de bienes jurídicos de naturaleza colectiva, faculta a cualquier persona física o jurídica a apersonarse a interponer acciones con el fin de tutelar y proteger ese bien jurídico violentado. Debe quedar claro que la legitimación de recurrir en la acción popular deriva de la misma norma jurídica y no de la existencia de un derecho subjetivo o un interés legítimo de esta forma en la acción popular existe un interés legítimo objetivo no así subjetivo.

para la corrección de las conductas que se consideran infractoras del mismo pero si representa el instrumento más grave.

La legislación ambiental parte de la premisa que a nivel mundial se considera que ha habido dos períodos en el Derecho Ambiental; un primer período que comenzó en el decenio de 1960 cuando a raíz de la preocupación cada vez mayor por el ambiente, agudizada por desastres concretos como el naufragio del buque petrolero Torrey Canyon en 1967, las descargas de sustancias químicas tóxicas como las de Minamata en el Japón y Bhopal en la India y la preocupación generada por los plaguicidas persistentes, se aprobaron muchas leyes y reglamentaciones nuevas en materia ambiental, principalmente en los países desarrollados².

El segundo período, comenzó en 1992, con la Cumbre para la Tierra³, cuyo propósito esencial fue crear instituciones y desarrollar una legislación que permitiera la conservación y uso razonable de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible.

En el área legislativa, los Parlamentos han creado Comisiones Especiales o Permanentes sobre Medio Ambiente, para conocer y dictaminar proyectos de leyes generando legislación abundante sobre la materia.

Para interpretar los delitos ambientales es necesario conocer los instrumentos administrativos que regulan la materia ambiental porque la norma penal nos remite a una norma administrativa. Es así que en el Poder Ejecutivo han surgido los Ministerios del Ambiente de Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Belice o Secretarías de Estado de Ambiente y Recursos Naturales como en

² En el año 1972 los autores MEADOWS, DONELLA, MEADOWS DENNOS, RANDERS JORGEN, publicaron la obra: *"Los límites del crecimiento"*. La conclusión de este trabajo llegó a determinar que la cuota límite de la explotación del planeta estaba en unos cincuenta años, con un probable colapso en unos ochenta años. En 1987 se aprobó el informe de la Comisión Brundtland el cual contenía una propuesta para construir un nuevo modelo basado en el desarrollo sustentable. Ambos documentos fueron fundamentales en la promoción de una nueva conciencia ambiental.

³ La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, conocida más comúnmente como "Cumbre para la Tierra", fue llevada a cabo del 3 al 14 de junio de 1992.

Honduras o la Autoridad Nacional del Ambiente, ente desconcentrado del Ministerio de Economía en Panamá. Para la aplicación de estas legislaciones ambientales, se han creado órganos y secciones especializadas en las Procuradurías y Ministerios Públicos para garantizar la eficacia, tal es el caso de Nicaragua de la Unidad Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Ministerio Público y la Procuraduría para la Defensa del Ambiente y los Recursos Naturales.

Con la Constitución de 1987 en Nicaragua se dio uno de los importantes pasos en la protección del ambiente porque se estableció dentro de sus principios sociales, el derecho de los nicaragüenses de gozar de un medio ambiente saludable y el deber del Estado de garantizarlo⁴; en esta etapa, y específicamente en la década del 90, Nicaragua suscribe y ratifica la mayoría de los Convenios y Declaraciones Internacionales relativos al ambiente, en el marco y como resultado de la celebración de la Cumbre de Río.

En la actualidad, Nicaragua ha suscrito alrededor de 45 Convenios Internacionales Ambientales, siendo los más importantes: El Convenio CITES⁵, Convenio de

⁴ El artículo 60 de la Constitución Política nicaragüense establece: Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable; es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales. El artículo 102 establece: Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales corresponden al Estado; éste podrá celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera.

⁵ CITES por sus siglas en inglés se denomina: The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora que en español se traduce Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Se trata de un Acuerdo internacional entre Gobiernos, redactado como el resultado de la resolución adoptada en 1973 en una reunión de los miembros de la "Unión Mundial para la Defensa del Medio ambiente" (World Conservation Union) (IUCN). Su propósito es el de asegurar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas salvajes no amenace su supervivencia en su medio natural. Los acuerdos son de varios grados de protección, y cubren a más de 30.000 especies de animales y plantas. Ninguna de las especies protegidas por la CITES se ha extinguido a consecuencia de su comercio, desde que el Acuerdo entró en vigor en 1975. CITES es uno de los mayores acuerdos existentes sobre protección de especies. La participación es voluntaria, y los Estados que han acordado firmar este Convenio se conocen como las "Partes". Nuestro País es parte de esta Convención, mediante la aprobación por el Congreso Nacional de la Resolución No. 47 del 11 de junio de 1977 y ratificada por el Presidente de la República mediante Decreto del 22 de junio de 1977 publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 183 del 15 de agosto de 1977.

Diversidad Biológica, Protocolo de Cartagena, Convenio de Cartagena para la protección de la Cuenca del Gran Caribe, Convenio de Cambio Climático de Río, Convención RAMSAR⁶, Basilea, Protocolo de Montreal. En materia de Declaraciones tenemos la Declaración de Río, Los Principios de Río, ALIDES⁷, entre los que han influido en la toma de medidas legislativas, administrativas y de políticas nacionales, por lo que en nuestro país se debe cumplir con los compromisos asumidos en dichos instrumentos legales y ajustar su política y legislación nacional a ellos, sin olvidar que aun se presenta en menor medida, la característica de dispersión y sectorización normativa, con gran incidencia en disposiciones de naturaleza administrativa.

Así mismo, se han desarrollado formalmente el tema de políticas públicas y ambiente, es así que en el año 2001 se promulgaron cinco políticas sobre la temática, siendo las siguientes: Política Ambiental y su Plan de Acción; Política de Desarrollo Forestal; Política Nacional de Recursos Hídricos, Política de Pesca y Acuicultura y Política General de Ordenamiento Territorial. Todas las Políticas han sido promulgadas, basadas en el artículo 150 de la Constitución Política, además en el los años siguientes se dictaron otras políticas, como por ejemplo, las de

⁶ La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida en forma abreviada como Convenio de Ramsar, fue firmada en la Ciudad de Ramsar el dos de febrero de 1971 y entró en vigor en 1975. Su principal objetivo es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. La lista Ramsar de Humedales de importancia internacional incluye en la actualidad más de 1200 lugares (sitios Ramsar) que cubren un área de 1.119.000 km², siendo el número de sitios en el año 2000 de 1021. El país con un mayor número de sitios es el Reino Unido con 169; la nación con el mayor área de humedales listados es Canadá con más de 130.000 km².

⁷ La Alianza Para el Desarrollo Sostenible, (ALIDES), es un Acuerdo entre los presidentes de Centroamérica firmado en 1994 con la finalidad de: inducir un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que implica, según el documento, el crecimiento económico con equidad social, la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo, sustentados en equilibrio ecológico. De forma más específica, la ALIDES establece compromisos regionales en: Legislación ambiental y de recursos naturales, legislación reglamentando las evaluaciones de impacto ambiental, agua, energía, control de la contaminación y desarrollo fronterizo.

Desarrollo Forestal y la Pesquera y de Acuicultura. La Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que data de 1996, y su Reglamento, Decreto No. 9-96, se complementan una serie de leyes, Decretos que desarrollan aspectos puntuales de la Ley 217.

Aunque Nicaragua es un Estado unitario, con un sistema de gobierno presidencialista, con una organización administrativa con marcado centralismo, ha avanzado en los últimos años hacia la descentralización y desconcentración administrativa. La Administración Pública nicaragüense tiene tres niveles⁸: central, regional y municipal. Los Gobiernos locales desde la década de los años 90 han venido dictando ordenanzas municipales con importante contenido ambiental.

Es importante mencionar que la intervención de los municipios a través de las ordenanzas en relación a la protección de los recursos naturales, fuera más efectiva si ésta se realizara dentro del contexto de la legalidad, como de coordinación con el resto de Ministerios y entes estatales.

Es conveniente resaltar que el estado actual de la legislación ambiental de Nicaragua, es propicio para realizar una eficiente gestión ambiental y aplicación de las normas ambientales y los esfuerzos deben dirigirse hacia la armonización interna y externa, implementando mecanismos de participación no solo de las autoridades administrativas estatales sino de autoridades judiciales y de toda la sociedad en general pues todos en colectividad dependemos del cuidado y uso que le demos a nuestro medio ambiente y los recursos naturales en cada rincón de nuestro país.

Nicaragua, país conocido como tierra de lagos y volcanes, actualmente es un país del tercer mundo, uno de los países mas pobres de América, que se está convirtiendo poco a poco en un país desértico, donde está escaseando el agua de manera vertiginosa y cada día existen menos ríos y vertientes producto de la tala

⁸ Ver, artículo 175 de la Constitución Política de Nicaragua y 6 de la Ley 290 Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

indiscriminada, el avance de la frontera agrícola y construcciones de urbanizaciones en zonas frágiles, después de haber sido en los años 70 el país agrícola más productor de Centro América. Es urgente conocer la forma en que se resolverán tanto a nivel investigativo como jurisdiccional los diversos casos donde se tramitarán delitos cometidos en contra el medio ambiente con el fin de evitar se continúe causando daño a nuestros ecosistemas y con ello regular y proteger los recursos naturales y que esto contribuya a la vez al impulso de nuestra economía; por lo que es primordial analizar la forma en que se investigará y ejercerá la acción penal en los delitos ambientales que se regulan respectivamente por la Ley 559 primera ley especial que sanciona ilícitos ambientales y la Ley 641 primer Código Penal de Nicaragua que tipifica delitos ambientales, normas que fueron creadas por la urgente necesidad de reducir el daño e impacto causado a nuestra naturaleza.

Siendo el Derecho Penal Ambiental en Nicaragua un Derecho de aplicación novel puesto que la ley que regula y sanciona ilícitos contra el medio ambiente y los recursos naturales propiamente dichos, la Ley 559⁹, Ley Especial de Delitos Contra el Ambiente y los Recursos Naturales, entró en vigencia desde el veinte de mayo del dos mil seis. Con la entrada en vigencia de dicha Ley se está llevando a cabo el ejercicio de la acción penal en los delitos ambientales con el objeto de encontrar un mecanismo de solución a los impactos ambientales negativos, teniéndose que efectuar para ello un análisis, estudios y actualización en dicha materia por parte de los Abogados que en el desempeño de sus funciones ya sea como fiscales, litigantes y jueces conocen de los procesos en los cuales se ejerza la acción penal cuando se produzca una conducta tipificada como delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

Hay que tomar en cuenta que el Derecho Ambiental se rige por normas penales en blanco y debemos reconocer que en Nicaragua existe una legislación ambiental

⁹ Ley No. 559, aprobada el 26 de Octubre del 2005 Publicada en La Gaceta No. 225 del 21 de Noviembre del 2005 y que fue derogada por el Código Penal vigente, Ley 641 publicado en las Gacetas Diario Oficial Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo del 2008 e cual entro en vigencia el nueve de julio del 2008.

disgregada que no es aplicada armónicamente, unas veces por desconocimiento de la misma, otras porque no están claramente definidas las competencias entre los diferentes entes o por falta de coordinación entre las diversas instituciones que intervienen en su gestión.

Considerando que Nicaragua es un país agrícola y que gran parte de nuestros recursos naturales especialmente los recursos forestales han sido devastados por personas o empresas de gran caudal económico para el enriquecimiento de unos pocos a costa de la explotación de la mano de obra y de la desaparición de grandes extensiones de vegetación, por otro lado que no existía antes de la entrada en vigencia de la Ley 559 un mecanismo de prevención y sanción efectiva para quienes causaban daños al medio ambiente puesto que únicamente se imponían sanciones de carácter administrativo con las que no se lograba ejecutar a los infractores por falta de vacíos legales y de recursos teniendo que hacer uso el legislador de la *ultima ratio* para la solución de los problemas de una sociedad como es el Derecho Penal, además tomando en cuenta que Nicaragua ha suscrito Convenios y tratados interregionales en los cuales existe compromisos por parte de nuestro país para priorizar la Agenda Ambiental sobre todo en lo concerniente a establecer un régimen regional de cooperación para la utilización optima y racional de los recursos naturales del área centroamericana, el control de la contaminación y el restablecimiento del equilibrio ecológico para garantizar una mejor calidad de vida a todos los que habitamos en esta zona de América, acorde esto último con lo establecido en el Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente que entro en vigencia en 1990 y mediante el cual se creó la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)¹⁰, y concatena a su vez con la entrada en

¹⁰ En febrero de 1989, los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua convinieron en crear la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo con el fin de fortalecer a las instancias nacionales que tengan a su cargo la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente. En 1991, Panamá y Belice se adhirieron a la Comisión. La CCAD busca encontrar la vía adecuada para auspiciar la compatibilización de los grandes lineamientos de política y legislación nacionales con las estrategias, con el fin de establecer la colaboración entre los países de la región para buscar conjuntamente la adopción de estilos de desarrollo sostenible buscando la participación de todas las instancias concernidas por el desarrollo. Con la creación de la CCAD en febrero 1989, se inició un gran reto para mantener y preservar el ambiente natural de la región. Este reto, fue

vigencia del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, los países centroamericanos y República Dominicana (DR-CAFTA)¹¹, Plan Puebla Panamá, y los compromisos adquiridos a través del proceso de integración centroamericana¹² y otros factores sociales, económicos y ambientales existentes en la actualidad, es importante el estudio del ejercicio de la acción penal en los delitos ambientales.

Indudablemente la prevención constituye el medio ideal para proteger el ambiente. Ello nos ha llevado a descuidar las medidas represivas, aquellas que intervienen una vez producido el hecho dañoso y en consecuencia una vez comprobado que la prevención tuvo fallas no obstante el papel de las medidas represivas es fundamental aun cuando solo fuera porque ellas van a asegurar las medidas preventivas.

Por una parte la reglamentación más detallada y las precauciones mas extremas no eliminarán el riesgo de los daños al ambiente menos aun tratándose de un tipo de daño estrechamente ligado a los avances tecnológicos en permanente transformación, por otra parte es preciso contar con la existencia de acciones ejecutadas en violación de las normas establecidas aun cuando pudieran preverse todas las situaciones. Luego nos enfrentamos a una realidad: aun cuando la prevención permanece siempre como el medio más adecuado y más deseable para proteger el ambiente se hace necesario en caso de fracaso de la prevención sanciones penales con el tratamiento adecuado.

Atendiendo un concepto tradicional de lo que es delito, es decir la estructura de la teoría general del delito como una conducta típica, antijurídica y culpable

sustentado con la suscripción en agosto de 1994 de la "Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible" (ALIDES), cuya novedad residió en que los Gobernantes del área decidieron adoptar una estrategia integral de desarrollo sostenible en la región.

¹¹ Tratado de Libre Comercio para Centroamérica y Republica Dominicana.

¹² Como Ejemplo de esos compromisos adquiridos tenemos la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), la que constituye una estrategia integral de desarrollo en C.A. con el objeto de promover la sostenibilidad política, económica, social, cultural y ambiental de las naciones centroamericanas.

sancionada por una pena o medida de seguridad y aplicándolo al Derecho Ambiental podemos obtener en términos generales un concepto vigente y acorde a nuestra legislación actual de lo que es el delito ambiental conforme la siguiente expresión:

“Delito Ambiental es toda conducta típica, antijurídica y culpable, que cause peligro o daño al ambiente ocasionando cambios o alteraciones a la salud y a los bienes del ser humano, afectando su derecho a gozar y a desarrollar su modo de vida y el de generaciones futuras”.

De la Ley Especial de Delitos Contra el Ambiente y los Recursos Naturales se desglosa el siguiente concepto de delito ambiental: *“Todas las acciones u omisiones que violen o alteren las disposiciones relativas a la conservación, protección, manejo, defensa y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales, así como el establecimiento de la responsabilidad civil por daños y perjuicios ocasionados por las personas naturales o jurídicas que resulten con responsabilidad comprobada”*¹³. Este concepto únicamente se tendrá como mera referencia metodológica puesto que la Ley No. 559 es derogada por el artículo 566 de la Ley 641¹⁴, Código penal vigente, con la excepción que establece el artículo 567 de la Ley 641, donde se instituye que los delitos y faltas cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha Ley se juzgarán conforme al Código Penal de 1974, las leyes que lo reforman y demás leyes especiales que contiene delitos y faltas penales lo que debe concordarse con la Ley 559 citada.

Aunque en la Ley 559 se sanciona a las personas jurídicas debe reconocerse que el Derecho Penal es personalísimo y que las penas de prisión no se pueden aplicar a personas jurídicas, por lo que debe interpretarse que la Ley 559 al sancionar a las personas jurídicas se refiere a las personas físicas que representan tales entidades, quienes deberán ser acusadas si se comprueba que han participado en un ilícito ambiental ya sea en forma personal directa o bien por autoría mediata cuando haya

¹³ Así lo dispone el artículo 1 de la Ley No. 559

¹⁴ La Ley 641, Código Penal actual fue publicada en las Gacetas Diario Oficial Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo del 2008 y entro en vigencia el nueve de julio del 2008.

ordenes a otras personas subalternas para que realicen el hecho. Con la Ley 641, Código Penal ya no se sanciona a las personas jurídicas dado que expresamente no se menciona tal disposición como lo hace la Ley 559, pero si se sanciona conforme el Artículo 45 de la Ley 641 a aquellas personas que actúan como directivos, administradores de hecho o de derecho u órgano de una persona jurídica o en nombre o representación legal o voluntaria de otro y que realicen un hecho que salvo en la cualidad del autor, sea subsumible en el precepto correspondiente al delito o falta y conforme el Artículo 389 de la Ley 641 únicamente se aplicarán consecuencias accesorias a las personas jurídicas cuando los delitos fueren realizados por intermedio de ellas.

2. Régimen jurídico de los delitos ambientales

El sistema procesal ambiental nicaragüense está conformado por los ejes de las vertientes administrativa y judicial; las cuales al igual que en el resto de los países de la región centroamericana han alcanzando su mayor intensidad formadora a partir de la década de los 70, época en la que los países centroamericanos dan inicio a un proceso intenso de la explotación de los recursos naturales y del ambiente.

Obviamente a lo largo de estos períodos, la evolución socioeconómica y la entrada en explotación de los recursos naturales, fue dando pauta para la promulgación de leyes que establecieron los procedimientos de acceso y uso de los recursos naturales, así como leyes y decretos específicos para la protección de alguno de ellos, avanzándose en la década de los 90, hacia la Ley General del Ambiente y posteriormente la regulación de los delitos ambientales, tanto en la Ley 559 como en el Código Penal, procurando alcanzar una propuesta jurídica – normativa integral; dándose como necesaria contrapartida la formulación de diversos procedimientos procesales ambientales los que a su vez han venido reorientándose hacia un estado de ordenamiento institucional, que conlleva un ordenamiento funcional y en consecuencia un grado mayor de coherencia institucional y judicial.

La Constitución Política de la República de Nicaragua estipula que los ciudadanos tienen derecho a participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y gestión estatal, el proceso de participación ciudadana es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política de Nicaragua y en diferentes instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, en los que el Estado nicaragüense asume el compromiso de favorecer el intercambio de información y las consultas acerca de las actividades ambientales bajo su jurisdicción y control.

Por otra parte, mediante la Ley 217 y sus reformas, Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales, se desarrollan los principios constitucionales entre los cuales destacan el derecho de información y a la denuncia pública, para lograr la utilización racional y el manejo sostenido de los recursos naturales y del ambiente en general.

El CAFTA-DR en su capítulo ambiental enuncia principios que impulsan el fortalecimiento de la participación ciudadana y la atención a las denuncias ambientales para todos los países partes. De igual manera, la Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales, estipula que los ciudadanos en general pueden accionar administrativa o judicialmente, este último con sustento en el Código Procesal Penal, para que se sancione toda acción u omisión que consideren delito o infracción administrativa.

Las denuncias por infracciones ambientales en la vía administrativa están amparadas en la Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales y su Reglamento y en el Código Procesal Penal en lo relacionado a la acción penal. Otras consideraciones también van en función de lo mandado por la Ley de Acceso a la Información Pública, y la Ley de Participación Ciudadana, para solo mencionar las más relevantes. Todas estas leyes pretenden dotar al ciudadano de respuestas rápidas y efectivas en el cumplimiento a los compromisos nacionales e internacionales en el tema ambiental.

Según la legislación nacional, cualquier ciudadano puede denunciar ante la autoridad competente todo acto y omisión que constituya un delito o infracción administrativa. La pregunta es ¿Quién es la autoridad competente? en principio la autoridad competente es el MARENA¹⁵, la Policía Nacional, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Ambiental, la Procuraduría Ambiental, pero se pueden mencionar otras instituciones con responsabilidad en la atención de denuncias ambientales tales como El INAFOR¹⁶, el MINSA y las Alcaldías Municipales, todas estas instituciones tienen la obligación de atender y estudiar la denuncia para verificar que en realidad se esté respetando el desarrollo sostenible, las instituciones gubernamentales administrativas también tienen la facultad de emitir permisos ambientales en cada una de sus materias así como licencias o concesiones para el acceso a los recursos naturales por consiguiente recepcionan denuncias sobre el comportamiento de los ciudadanos en el manejo ambiental.

La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley No. 217 (1996); establece que las infracciones que se cometan en contra de la misma ley serán sancionadas administrativamente. Con ese propósito, sus Artículos 137 a 139 conectados con los artículos 148 a 151 regulan el procedimiento administrativo e indican cuáles son las sanciones aplicables en el mismo.

¹⁵ De conformidad con el artículo 3 del Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Decreto No. 9-96 publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 63 del 29 de agosto de 1996, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) es la autoridad nacional competente en materia de regulación, normación, monitoreo, control de la calidad ambiental, del uso sostenible de los recursos naturales renovables y el manejo ambiental de los no renovables conforme lo dispuesto en la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y demás leyes vigentes. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales es además la autoridad competente para sancionar administrativamente por el incumplimiento de las normas ambientales. Estas atribuciones las ejercerá en coordinación con otros organismos estatales y las autoridades regionales y municipales pertinentes.

¹⁶ El Instituto Nacional Forestal (INAFOR) de conformidad con los Arts. 7 y 12 de la Ley 462, Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 168 del 04 de septiembre del 2003 esta bajo la rectoría sectorial del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), tiene por objeto velar por el cumplimiento del régimen forestal en todo el territorio nacional y será el responsable de supervisar, monitorear, fiscalizar y controlar la ejecución de las normas técnicas forestales y planes de manejo forestales en todo el territorio nacional estableciendo las debidas coordinaciones con las Comisiones Forestales respectivas.

Es decir, podemos decir que el Derecho Procesal Ambiental, se realiza en dos dimensiones, la estrictamente judicial ejecutada a través de la función jurisdiccional, partiendo de los límites que el derecho sustantivo establece, y la propiamente administrativa, en la cual, órganos no judiciales a través de procedimientos administrativos aplican su jurisdicción institucional, tal como es el caso de las instituciones relacionadas al ambiente, que tienen la responsabilidad de velar por la aplicación de Leyes, Decretos, Reglamentos y Resoluciones relacionadas con los recursos naturales y el ambiente. La estrictamente judicial se regula por la Ley 406; Código Procesal Penal de la República de Nicaragua y la administrativa se regula por la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

En los delitos ambientales las normas penales en blanco juegan un papel fundamental debido a que la tipificación de los mismos no puede recoger los múltiples matices de la afectación ambiental de modo que resulta inevitable remitirse al reglamento para completar la definición, por lo que la ley penal en blanco plantea un reenvío a una norma de carácter administrativo estableciendo la modalidad para que se configure el tipo penal, por ejemplo en nuestro Código Penal los tipos penales ambientales de contaminación de suelo y subsuelo (Arto. 365) y caza de animales en peligro de extinción se incorporan como leyes penales en blanco al expresarse respectivamente los siguientes enunciados: “Quien directa o indirectamente *sin la debida autorización de la autoridad competente y en contravención a las normas técnicas respectivas...*”, “*El que cace animales que han sido declarados en peligro de extinción por los instrumentos internacionales ratificados por el Estado o definición como tales por la ley o por disposiciones administrativas...*”

Bajo estos procedimientos, se incorpora la denuncia como uno de los mecanismos de¹⁷ inicio de los procesos ambientales, tanto en la vía penal como administrativa. Cuando se recibe la denuncia, el Ministerio Público valora si el hecho denunciado no constituye delito, falta, es absurdo o manifiestamente falso y archivara o

¹⁷ Según lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 222 los delitos ambientales como delito de acción pública pueden ser denunciados por cualquier persona que tenga noticia del mismo.

desestimar la denuncia en su caso. Si el hecho es constitutivo de delito, se formula acusación.

La responsabilidad administrativa en nuestro sistema jurídico es fundamental ya que la mayor parte de la legislación ambiental está concebida a los administrados, cuyo cumplimiento debe ser fiscalizado por la Administración. Las violaciones a dichos mandatos deben ser sancionadas por la misma administración, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudieran derivarse de los mismos hechos. Por lo que es necesario establecer las características de una denuncia tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal como se explica a continuación:

Para la legitimación de la denuncia la legislación ambiental nicaragüense, no exige para los casos ambientales una legitimidad de intereses, para poner en conocimiento de quienes ejercen la actividad investigativa cualquier noticia que se conozca sobre la violación a las normas ambientales vigentes. Pueden interponer las denuncias ambientales:

- Los funcionarios y empleados públicos están obligados a denunciar en casos que conozcan delitos ambientales en el ejercicio de sus funciones.
- Toda persona que tenga noticia de un delito ambiental podrá denunciarlo verbalmente o por escrito ante el Ministerio Público o la Policía Nacional. El denunciante tendrá derecho a que se le extienda copia de la denuncia.
- La víctima. Es decir en delitos ambientales la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
- La autoridad administrativa. Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.
- Cualquier persona natural o jurídica podrá acusar ante los tribunales de justicia un delito de acción pública, incluyendo los delitos cometidos por funcionarios públicos.

El Ministerio Público a través de la Fiscalía Ambiental, promoverá y ejercerá la acción penal pública cuando, por cualquier medio, tenga noticia del delito, sin perjuicio de los casos en que está facultado para intervenir de oficio. El Ministerio

Público, con el auxilio de la Policía Nacional, tiene el deber de procurar el esclarecimiento de los hechos en el proceso penal, cumpliendo estrictamente con los fines de la persecución penal.

La víctima, que en el caso de los delitos ambientales puede ser el Estado este será representada por la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.

En cuanto a los requisitos para denuncia por infracciones ambientales administrativas La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, estipula en el Arto. 137, que la denuncia por infracciones ambientales, se efectúe por escrito y que contenga los siguientes datos:

- Nombres y Apellidos, con las generales de ley del denunciante.
- Nombres y Apellidos, con las generales de ley del denunciado, cuando sea una persona natural.
- Razón social de la entidad y ubicación, cuando el denunciando sea una persona jurídica
- La relación de los hechos que constituyen la infracción o infracciones.
- El señalamiento de un local en donde el denunciante se le pueda efectuar las notificaciones del proceso administrativo.
- La fecha y lugar en donde se efectúa la denuncia y la firma.
- El denunciante debe acudir ante la autoridad competente, que para el caso es la Delegación Territorial (Departamental) del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales y presentarlo ante el Delegado del MARENA.
- El Delegado debe poner una razón de presentación al pie del escrito presentado en que haga constar, quién lo presenta y poniendo constancia de la fecha y hora de presentación para darle curso a la denuncia presentada.

En cuanto a los requisitos para presentar denuncia por delitos ambientales estos están recogidos en los artículos 222 al 226, estableciéndose que la denuncia puede hacerse verbalmente o por escrito, ya sea ante el Ministerio Público o ante la Policía Nacional. Si la denuncia se presenta verbalmente, se deberá levantar un acta de la misma y el denunciante tendrá derecho que se le entregue copia de la denuncia, en ambos casos se llenaran los siguientes requisitos:

- Relatar en forma concisa los hechos que se consideran delictivos, la fecha de ocurrencia de los mismos y la identidad de los responsables, si ésta es conocida, caso contrario, la descripción de las características físicas de los sospechosos.
- Indicación del lugar y fecha.
- El nombre, apellido y domicilio del denunciante, debiendo consignarse el documento de identificación personal.
- Relación circunstanciada de los hechos.
- Indicación del nombre, apellidos y domicilio de cuantas personas hayan intervenido en el hecho o puedan proporcionar información sobre lo sucedido o, en caso de que esos datos no fueren conocidos, deberán indicarse cualesquiera otros que puedan servir para la identificación y localización de tales personas.
- La firma del denunciante.

Antes de la entrada en vigencia de la Ley 559 no existía ninguna disposición legal que sancionara tipos penales contra el ambiente propiamente dichos, sino que con el Código Penal muy escuetamente se protegía el ambiente a través de tipos penales que protegen otros bienes jurídicos como la salud pública, bienes privados, bien estatal a través de los delitos de usurpación de dominio público, hurto, delitos contra la salud pública etc. La Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 105 del seis de junio de 1996, que precedió a la Ley 559 en lo concerniente a la regulación de conductas contra el medio ambiente, únicamente establecía un procedimiento administrativo

en materia ambiental no existiendo penas de prisión, debiéndose adecuar mediante las normas establecidas en el Código Penal conductas cometidas en perjuicio del medio ambiente, por lo que con la Ley 217 fueron excepcionales los casos en los cuales se procesaba penalmente a personas que hubieran causado daños al medio ambiente ¹⁸.

Se logra establecer que con la entrada en vigencia del Código Penal, Ley No. 641 los delitos ambientales que quedaron estrictamente regulados como tales son los contemplados en el artículo 363 que sanciona la construcción en lugares prohibidos, artículo 364, regula la alteración del entorno o paisaje natural, artículo 365 sanciona la contaminación de suelo o subsuelo, artículo 366, la contaminación de aguas, artículo 367, la contaminación atmosférica, artículo 368, el transporte de materiales y desechos tóxicos, peligrosos o contaminantes, artículo 369, el almacenamiento o manipulación de sustancia tóxicas, peligrosas, explosivas, radioactivas o contaminantes, artículo 371, la violación a lo dispuesto por los estudios de impacto ambiental, artículo 372, la incorporación o suministro de información falsa, artículo 373, el aprovechamiento ilegal de recursos naturales, artículo 374, el desvío y aprovechamiento ilícito de aguas, artículo 375, la pesca en época de veda, artículo 376, el trasiego de pesca o descarte en alta mar, artículo 377, la pesca sin dispositivos de conservación, artículo 378, la pesca con explosivos u otra forma destructiva de pesca, artículo 379, la pesca con bandera extranjera no autorizada, artículo 380, la caza de animales en peligro de extinción, artículo 381, la comercialización de fauna y flora, artículo 383, los incendios forestales, artículo 384, el corte, aprovechamiento y veda forestal, artículo 385, las talas en vertientes y pendientes, artículo 386, el corte, transporte y comercialización ilegal de madera, artículo 387, el corte o poda de árboles en casco urbano, artículo 388, el incumplimiento de estudio de impacto ambiental, artículo 390, la introducción de especies invasoras, agentes biológicos o bioquímicas y artículo 391, los daños físicos

¹⁸ El artículo 134 de la ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales refiere que toda infracción a dicha ley y sus reglamentos, será sancionada administrativamente por la autoridad competente, de conformidad al procedimiento aquí establecido, sin perjuicio de lo

o maltrato a animales En cuanto al procedimiento para conocer de delitos ambientales este se sujeta a lo establecido en el Código Procesal Penal¹⁹.

3. La Constitución Política y el Derecho Ambiental en Nicaragua

En nuestra Constitución Política se ha dispuesto una clasificación en la cual se dividen los derechos relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales en dos grandes grupos, tales son: El primer grupo que es el referido al reconocimiento del derecho que tienen los nicaragüenses a vivir en un ambiente digno y saludable y la responsabilidad sobre el cuidado del mismo²⁰ y El segundo grupo relacionado a los derechos reales sobre los recursos naturales. La Constitución clasifica al Medio ambiente y los Recursos Naturales como propiedad de la Nación²¹ el derecho de goce, uso y disfrute de las aguas y el bosque que se encuentran en tierras comunales a las comunidades de la Costa Atlántica y el goce, uso y disfrute de sus tierras comunales. Los recursos naturales son patrimonio nacional.

La preservación del ambiente y la conservación desarrollo y explotación racional de los recursos naturales corresponde al Estado este podrá celebrar contratos de explotación racional de estos recursos cuando el interés nacional lo requiera. En el arto. 89 inciso 3 Cn. se establece que el Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las comunidades de la Costa Atlántica igualmente reconoce goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales en la Constitución Política se mezcla el componente ambiental con el municipal, señalándose en el artículo 177 inciso 4 Cn. que los Gobiernos municipales tienen competencia en materia que incida en el desarrollo socio económico de su circunscripción y le otorga la potestad de opinar antes de su autorización en los contratos de explotación racional de los recursos naturales. En el arto. 181 Cn. inciso 2 se expresa que las concesiones y

dispuesto en el código penal y las leyes específicas, así como de otras acciones penales y civiles que puedan derivarse de las mismas.

¹⁹ Art. 58 de la Ley 559.

²⁰ Arto. 60 de la Constitución Política de Nicaragua.

²¹ Arto. 102 de la Constitución Política de Nicaragua.

contratos de explotación de recursos naturales que otorgue el Estado en las Regiones Autónomas, deberán contar con la aprobación previa del Consejo Regional Autónomo respectivo.

4. El Estado como víctima en los delitos ambientales

Cuando hablamos de Derecho Ambiental nos hemos de referir necesariamente a las disposiciones sectoriales que administrativamente ejercen las instituciones del Estado para regular y proteger el medio ambiente y los recursos naturales y en este sentido cuando se vulnera una disposición administrativa ambiental que regula determinada institución del Estado este puede tenerse como víctima en el proceso ya sea como un todo o en alguna de sus instituciones y en esa condición no puede quedar desprotegido ni privado de su propia tutela.

De lo que resulta que llega al proceso despojado de imperio, impetrando tutela jurisdiccional, necesariamente en condición de persona privada para mantener el equilibrio procesal con su contraparte, el acusado. Así lo sustenta el arto. 109 numeral 3 CPP en donde se expresa que la Procuraduría General de la República es considerada víctima u ofendida “en representación del Estado y sus instituciones” y el arto. 2 numeral 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República manifiesta como una de sus atribuciones la representación del Estado “como persona privada” en causas penales y otras.

De tal forma pues que en nuestro ordenamiento procesal penal la Procuraduría General de la República puede ejercer la acción pública a la par del Ministerio Público adhiriéndose o formulando su propia acusación. Según el arto. 2 de la Ley 559 el Estado por medio de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales también podrá ser parte en los procesos ejerciendo la representación y defensa de los intereses del Estado en esta materia, figura aquí en el proceso con toda la majestad de imperio que deviene de su condición de tutelar exclusivo de la potestad jurisdiccional es el Estado persecutor por excelencia de

quienes dañan el ambiente y los recursos naturales, esta facultad también la ampara la Constitución política en su art. 60 que expresa: “Los nicaragüenses tienen derecho a habitar en un ambiente digno y saludable, es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales.” Taxativamente se le reconoce la condición de víctima al Estado en los delitos contra el Medio Ambiente en el Art. 5 de la Ley No. 647 Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 217 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales norma en la cual además se crea la Procuraduría para la Defensa del Ambiente y de los Recursos Naturales como rama especializada de la Procuraduría General de la Republica la cual ejercerá la representación y defensa de los intereses del Estado y la sociedad en los juicios que se promuevan en materia ambiental sean de índole administrativo, civil o penal.

En los casos en los cuales el Ministerio Publico ha ejercido la acción penal por delitos ambientales en nuestro país El Estado en su calidad de victima a través de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales se ha constituido en parte acusadora adherida a la acusación del Ministerio Publico conforme el Arto. 78.1 CPP o bien ha solicitado su intervención de ley como victima conforme el Arto. 110 CPP, no quedando desprotegidos los intereses del Estado en los procesos penales por delitos ambientales.

5. Bien jurídico protegido en los delitos ambientales

El bien jurídico protegido por el Derecho Ambiental es el medio natural y el hecho social objeto de este derecho es el daño ecológico como consecuencia mediata o inmediata de la intervención del hombre en la administración de los recursos naturales y que afectan intereses difusos o colectivos, que están por encima de toda relación individuo- Estado y porque su separación pertenece como *ultima ratio* a la sociedad.

El delito de peligro no es más que el resultado riesgoso potencialmente apto para provocar un daño. Es decir, que desde el punto de vista penal, el resultado se satisface, se realiza con solo consumir el riesgo que a su vez tiene que ser potencialmente apto para provocar después un daño (el daño también es otro resultado). Pero ya el riesgo es un resultado típico.

De modo que parece conveniente determinar desde la perspectiva de la necesidad de la pena qué es lo adecuado en relación al bien jurídico medio ambiente, esto es si configurar los delitos como de lesión o puesta en peligro concreto. Al respecto, en los bienes jurídicos colectivos tiende a producirse una confusión dogmática dada la reciente incorporación y su relación teológica con los bienes directamente ligados a la persona. La doctrina tiende a señalar que han de configurarse como delito de peligro abstracto pues considera el riesgo a la persona como lo fundamental pero ese riesgo no es una característica del tipo, sino la concepción general de los bienes jurídicos ligados al funcionamiento del sistema. Un funcionamiento inadecuado pone en riesgo a las personas, justamente por eso se configuran, por ejemplo los delitos contra los bienes jurídicos colectivos. Pero el bien jurídico colectivo hemos señalado que es real y por tanto autónomo de los bienes jurídicos referidos a la existencia del sistema quiere decir que tiene su propia estructura y por tanto puede ser afectado ya sea por lesión o puesta en peligro concreta, sin necesidad de recurrir a los bienes jurídicos ligados a la existencia del sistema, de ahí entonces consideramos un delito contra el medio ambiente como un delito de peligro abstracto contra la salud individual o seguridad individual, pues con ello entonces se está abandonando la autonomía y realidad del bien jurídico medio ambiente y retomando a la idea de su artificialidad.

6. La prueba en los tipos penales ambientales

La prueba es aquella actividad que desarrollan las partes con el Tribunal para adquirir el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica o para fijarlos como ciertos a los efectos de un proceso.

Desde otro punto de vista, puede hablarse de prueba para referirse a los distintos medios probatorios, a los medios concretos de determinar o fijar la certeza positiva o negativa de un hecho. Así se habla de prueba de testigos, de prueba de peritos de prueba documental, etc.

La prueba es el instrumento procesal más relevante para determinar los hechos, a efectos del proceso. Pues en efecto el enjuiciamiento final de la sentencia de fondo exige una reconstrucción de los hechos, un juicio de hecho, como labor previa a la del juicio de derecho: primero debe fijarse los hechos relativos al proceso y después, estos hechos se subsumirán bajo las correspondientes normas jurídicas. Solo mediante la prueba puede el actor penal demostrar ante el juez su imputación y solo de ella puede servirse este para fundamentar su decisión.

Por ello es que los juristas han dado gran importancia al estudio de la prueba, por ejemplo refiere Florián que la prueba es el alma del proceso y que en todo el inmenso campo del Derecho no puede encontrarse nada más fecundo y amplio que la materia probatoria y toda la fuerza del proceso está en la prueba.

En los delitos ambientales para obtener el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidad de los culpables se requiere de un estudio acucioso y complejo por cuanto se debe tener el apoyo científico de expertos en la materia vinculada a los hechos investigados, pues el juez no posee conocimientos especializados en cada una de los temas ambientales, esto lo estableció claramente la Ley No. 559 que en su arto. 4 expresa: *“Normas técnicas: Para establecer la conducta ilícita la autoridad judicial deberá observar y auxiliarse de lo que para tal efecto determinan las normas técnicas obligatorias u otras normativas ambientales, que fijen los límites permisibles al ambiente, dictadas por las instituciones competentes de conformidad con sus atribuciones establecidas en la ley de la materia”*.

En este caso se debe tener en cuenta que no solo es necesario que el juez conozca de las normas administrativas sino que para tener certeza del hecho investigado debe también auxiliarse de los peritos conocedores de la materia en investigación además de los otros medios de prueba y de este modo obtener la percepción indubitable de la verdad.

Uno de los problemas mas comunes que se pudieran presentar en la investigación de un delito ambiental es la falta de realización de la cadena de custodia que establece el arto. 215 CPP o sea que no se observaren los procedimientos técnicos de recolección, identificación y conservación de las pruebas materiales en bruto que serán introducidas al proceso mediante la peritación e inspección, esto porque puede darse casos donde no exista el personal capacitado ni las condiciones necesarias para tal efecto, debido a que para demostrar un delito ambiental es necesario contar con una persona especialista en la rama donde se estudie el recurso natural afectado.

Por ejemplo para demostrar el corte de recursos forestales se requiere del auxilio de un Ingeniero Forestal o especialidad afín, para demostrar el daño físico y maltrato a animales se requiere del auxilio de un zootecnista, veterinario u otro especialista de una ciencia afín y así sucesivamente es indispensable para la interpretación de cada uno de los delitos ambientales del apoyo de un experto en el ramo del recurso natural afectado.

Por ello las partes procesales deben indagarse en cada caso concreto que rama de la ciencia esta vinculada a los hechos por los cuales se ejerce la acción y de esta manera obtendrán un mayor aporte y sustento en la defensa de sus respectivas teorías del caso.

En la comisión de los delitos ambientales las autoridades investigativas pueden encontrar diversos tipos de evidencias dependiendo de los elementos ambientales

afectados. Estas evidencias pueden ser variadas y dentro de ellas tenemos las siguientes:

a) *Documentos*: tales como tener facturas, licencias o permisos de impacto ambiental, libros de entrada y salida de productos, dictámenes técnicos de instituciones, inspecciones de campo realizadas administrativamente por instituciones reguladoras y protectoras de medio ambientes y los recursos naturales como lo son el MINSA, MARENA, INAFOR, INE, entre otras.

b) *Especies de la fauna*: como aves, mamíferos y reptiles, las cuales deben ser valoradas por un especialista (biólogo, zootecnista, veterinario, etc.) dependiendo de la especie con el objeto que se determine el tipo de especie, el estado de salud y el lugar donde deben ser resguardados durante la etapa de investigación y proceso.

c) *Madera*: La cual es ocupada cuando es transportada ilegalmente o se esta aprovechando sin los correspondientes permisos y debe ser analizada por un especialista (agronomo, ingeniero forestal) para que se determine el tipo de especie, la cantidad, si esta en veda o no y el impacto producido al medio ambiente por el beneficio ilícito de dicho recurso.

d) *Combustibles y plaguicidas*: que son algunas de las sustancias con las cuales se causa la contaminación a los recursos naturales suelo y agua entre ellas están el diesel, la gasolina, bunker, cipermetrina, azufre y furadan, los cuales son productos que se utilizan tanto en la industria de suministro de hidrocarburos como en las labores agrícolas.

7. La acción procesal penal en los delitos ambientales

De acuerdo con lo normado en nuestro Código Penal Ley 641 y Código Procesal Penal se puede deducir como definición de la acción procesal en materia de delitos ambientales a: *“La Potestad del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República o el derecho de cualquier persona, víctima o no del delito, de pedir la apertura de un proceso contra una persona natural o jurídica determinada y en relación con un hecho concreto que presumiblemente configure un ilícito penal ambiental, de participar activamente en ese*

proceso en condición de parte, pedir la sentencia que se estime procedente, impugnarla si se considera que causa agravio e instar su ejecución. ”

Se menciona en el párrafo anterior a la Procuraduría con potestad de ejercer la acción penal porque el arto. 564 de la Ley 641 establece que sin perjuicio de la potestad del Ministerio Público de ejercer de oficio la acción penal en los delitos menos graves la víctima podrá ejercerla directamente la acción ante el juzgado competente, sin necesidad de agotar la vía administrativa, lo que debe concordarse con lo establecido en el arto. 5 de la Ley 647, Ley de Reformas y adiciones a la Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, donde se le reconoce al Estado la condición de víctima en los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.

Por ende para que el órgano jurisdiccional inicie un proceso por delitos ambientales es requisito indispensable que el actor necesaria, inevitable y obligatoriamente ejercite la acción cuando estén reunidos los requisitos o exigencias legales para su ejercicio. La inevitabilidad de dicha acción consiste en que no se puede aplicar ninguna pena sino a través del ejercicio de la acción penal que provoque una decisión jurisdiccional, la acción es necesaria para obtener tanto una declaración negativa como afirmativa.

El dinamismo de la acción es ilustrado magistralmente por Alcalá - Zamora y Castillo con la siguiente imagen: *“La acción no es un empujón que se de a la pretensión litigiosa para que franquee la puerta jurisdiccional, sino una vibración continua para que llegue a su destino. Cuando, verbigracia, una de las partes promueve una cuestión de competencia, recusa a un juez, pide reposición de una providencia, impugna una sentencia, recaba medidas cautelares o insta la ejecución del fallo, no hace otra cosa que accionar. ”*

8. Acusación en los delitos ambientales

Acusación es la imputación formal de cargos con que tanto el actor penal oficial (Ministerio Público o Procuraduría General de la República) como el actor penal particular (acusador particular) inician el ejercicio de la acción penal pública.

El Ministerio Público es el representante de los intereses de la sociedad y de la víctima en el proceso penal y como tal se encuentra obligado a ejercer de oficio la acción penal en los delitos de acción pública, puesto que afectan además de los perjudicados directamente, los derechos de todas las personas y más aún cuando se trate de delitos ambientales que se afectan los intereses de toda la colectividad, por lo que el Ministerio Público tiene la obligación de ejercitar la acción penal haya o no requerimiento del ofendido salvo en los casos de los delitos de acción pública a instancia particular que requieren la denuncia previa de la víctima para que pueda proceder.

Por su organización los delitos en contra del medio ambiente y los recursos naturales presentan un gran contenido administrativo y han sido frecuentemente criticados en función de la legalidad de su estructura.

Es debido al contenido administrativo que quien investiga y ejerce la acción penal en delitos ambientales requiere para determinar la responsabilidad penal de una precisa coordinación y colaboración con las instituciones inmiscuidas en la problemática ambiental.

La efectividad o fracaso de los procedimientos penales iniciados por delitos ambientales estriba en gran medida en los elementos probatorios aportados por las autoridades administrativas, tales como peritajes, informes sobre autorizaciones, caracterización de sustancias peligrosas, así como las actas administrativas levantadas por infracciones posiblemente constitutivas de delitos ambientales.

El hecho de que no sea en el proceso donde se busque el sustento de la acusación debería hacer muy difícil y más cuando se trata de delitos ambientales que el fiscal o el acusador particular se arriesguen a pedir su apertura sin contar ya en ese momento con suficiente respaldo probatorio para su acusación, el que debería ser relacionado en el mismo acto, como lo exige el art. 77 CPP al disponer que el escrito de acusación deberá contener los elementos de convicción que sustentan la acusación disponible en el momento.

Lo anterior equivale a decir que cuando se formula una acusación por delito ambiental sin un sustento probatorio determinado, establecido y preponderado no existirá ninguna viabilidad en esa acusación dado que la característica multidisciplinaria que sustenta al Derecho Ambiental exige el auxilio de otras ciencias para determinar la certeza de los hechos.

Es por lo antes señalado que hay que tomar en cuenta que cuando se presente una acusación donde se haya investigado un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales debió haber considerado para el sustento legal de la misma dos aspectos fundamentales:

Primero: La obtención de un informe pericial emitido por persona debidamente acreditada donde se constate científicamente que las muestras, análisis y estudios realizados sobre determinado hecho corresponden a la evidencia que expresamente la Ley 559 señala como requisito *sine quanon* para que una conducta se tenga como delito ambiental.

Segundo: Analizar la norma administrativa que haya sido tomada como referencia para la sanción de una conducta ambiental, pues la norma administrativa debe estar ligada estrechamente en su contenido e interpretación al tipo penal ambiental pues en caso de haber roce entre la norma administrativa y la norma penal no podría utilizarse medios de prueba que administrativamente van en un sentido interpretativo contradictorio a la norma penal.

Por ello, cuando se esté en presencia de un reo detenido por cometer un delito ambiental es poco probable que se acuse dentro del plazo constitucional de las 48 horas dado que los informes técnicos especializados y las pruebas periciales requieren en su mayoría de un lapso mayor a las 48 horas por su complejidad por lo que deberá ponerse en libertad al reo para no violentar sus garantías y esperar los resultados de los análisis periciales que emanen las instituciones respectivas para tener una certeza del ilícito a investigar.

9. Acusación por delito de aprovechamiento ilegal de recursos naturales

Contrariamente a lo previsto en otras legislaciones en el Código Procesal Penal nicaragüense cuando se imputan cargos en una acusación esta se hace con carácter definitiva, pues se llega al proceso a debatir sobre una acusación bien sustentada en una etapa investigativa anterior al proceso, sin perjuicio de la posibilidad poco frecuente de ampliar la acusación.

Cuando se acusa por un delito ambiental debe existir un sustento probatorio a como lo señala el arto. 257 y 268 CPP donde en el primero de estos artículos se dispone que el Juez deba rechazar la acusación que no reúna los requisitos establecidos en el presente Código y el arto. 268 impone al acusador la carga de la prueba que sustente la acusación es decir elementos de prueba que establezcan indicios racionales suficientes para llevar a juicio al acusado. En el caso de los delitos ambientales el acusador debe despertar un celo excesivo para sustentar debidamente una acusación pues al estar supeditado el proceso penal ambiental a normas administrativas sectoriales los elementos de prueba deben haber sido obtenidos de manera tal que éstos estén relacionados coherentemente a tres circunstancias como son: a) A la tipificación que hace la Ley 559 de un delito ambiental determinado. B) A las normas técnicas administrativas que se exigen para la preservación y conservación

del medio ambiente y los recursos naturales. C) A los requisitos procesales penales que se exigen para la preservación de la cadena de custodia.

En la formulación de una acusación por delito ambiental también ha de cumplirse estrictamente con los requisitos que establece el arto. 77 CPP, y que son los siguientes:

Nombre del Tribunal al que se dirige la acusación: La acusación deberá dirigirse al tribunal con competencia material u objetiva, que establece el arto. 20 CPP en causas de delitos graves siendo competente el Juez de Distrito y en causas de delitos menos graves el Juez Local. Por ejemplo, de acuerdo con la estructura en los Juzgados de Managua y dependiendo del Juzgado al cual según sorteo haya sido asignada la causa por la Oficina de Recepción y Distribución de Causas cuando se presenta una acusación por delito menos grave la acusación se dirigirá así: Juzgado Primero Local Penal De Managua. Cuando sea una acusación por delito grave la acusación se dirigirá así: Juzgado Primero de Distrito Penal de Audiencias de Managua.

Nombre y cargo del Fiscal. Únicamente basta aquí con que el Fiscal se identifique con su nombre y los dígitos de su credencial, no es necesario otro dato que haga tequiosa la lectura de la acusación, como la fecha de su nombramiento o el plazo para el que fue nombrado, por ejemplo “Quien suscribe Mario López Montiel en mi carácter de Fiscal Auxiliar con credencial del Ministerio Público No. XXX...”

Nombre y generales de ley del acusado. Si se conocen o los datos que sirvan para su identificación. Ha habido muchos casos en que los acusados suministran datos falsos o alterados tratando de evadir su responsabilidad, pero ello no es motivo para que una acusación sea rechazada o sea objeto de nulidad el proceso, a efectos del proceso penal basta la identidad física del acusado erigida desde sus rasgos o características específicas definitorias pudiéndose incluso sentenciar a pesar de existir indeterminación sobre su nombre o sus generales. Hay que recordar que en los delitos ambientales también pueden ser acusadas las personas jurídicas y en este

sentido los datos de un órgano jurídico se deberán obtener con mayor certeza mediante las investigaciones que se efectúen ante las instituciones que llevan el registro de las personas jurídicas como es el Registro Mercantil, Ministerio de Gobernación, instituciones gubernamentales del Estado, etc. los datos de identificación del ente jurídico objeto de investigación.

Nombre y generales de ley o datos que sirvan para la identificación del ofendido o víctima si se conocen. En los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales como se afectan intereses de la colectividad la víctima será el medio ambiente y los recursos naturales, sin perjuicio de que en su carácter de víctima pueda comparecer tanto el Estado como cualquier persona que haya sido afectada por una actividad ilícita ambiental.

La relación clara, precisa, específica y circunstanciada del hecho punible, la participación del acusado, su posible calificación legal y los elementos de convicción que la sustentan disponibles en el momento. Esto es lo que se considera tanto el cuadro fáctico es decir el hecho o el conjunto de hechos y que constituye el núcleo de la acusación aquello sobre lo que va a versar el proceso, como el encuadramiento del hecho en una figura típica del ordenamiento penal sustantivo y su concatenación en el caso de los delitos ambientales a la norma administrativa la cual también debe ser reflejada en la acusación para una mejor apreciación y sustento ante el juzgador.

De allí la necesidad de que los hechos sean escritos en la forma siguiente: clara: lo que significa de fácil comprensión. Precisa: o sea exacta y rigurosamente. Circunstanciada: Especificando todas las circunstancias de tiempo, lugar, modo de ejecución o de participación, lo que ha de entenderse por ellas la persona, el hecho, el lugar, los medios, los motivos, la manera y el tiempo. Especifica: separando los distintos hechos de una acusación con imputación múltiple. Ya nos hemos referido a los elementos de convicción.

La solicitud de trámite. Es el requisito con menos importancia de una acusación, pues su omisión no afecta en nada la acusación porque ésta ya tiene su fin claramente definido como es el hecho mismo que se le de trámite con solo su presentación ante el Juzgado correspondiente.

10. Comentarios a acusación por delito ambiental

Para una mejor comprensión practica de lo que es una acusación ambiental a continuación se presenta un ejemplo de acusación por delito ambiental, con esta acusación, conforme a la Ley 559, se obtuvo la primer sentencia por delito ambiental y en ella se acusaba a una persona por el delito de aprovechamiento ilegal de recursos naturales ya que transportaba ilegalmente mariscos sin autorización de la entidad correspondiente.

Formulación de acusación y solicitud de apertura del proceso.

Señor (a) juez local penal del municipio de Tipitapa Departamento de Managua.

El suscrito Fiscal ----, en representación del Ministerio Público, Unidad Especializada de Delitos Contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, lo que acredito con credencial No. -----, ante usted con el debido respeto comparezco de conformidad con los artículos 51 inciso 7) 77 inciso 6, 80, 89 del Código Procesal Penal y artos. 1 y 2 de la Ley No. 559, Ley Especial de Delitos Contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, formulando acusación en contra de Denis Francisco Quiroz Quiroz, por considerarlo autor en la comisión del delito de aprovechamiento ilegal de los recursos naturales en perjuicio del medio ambiente y los recursos naturales de la República de Nicaragua por los hechos que detallo a continuación.

Datos de identificación del acusado:

Denis Francisco Quiroz Quiroz, mayor de edad, con numero de pasaporte 612163599, No de cedula 6121635 de nacionalidad de Costa Rica en Barranca Punta Arenas.

Datos de identificación de la víctima:

El medio ambiente y Estado de Nicaragua.

Relación de hechos:

1.- El día diez de septiembre del año dos mil seis a eso de las una y treinta minutos de la tarde en la Ciudad de Rivas en el Puesto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica, el perito del Ministerio de Fomento Industria y Comercio, Administración Nacional de Pesca y Acuicultura (MIFIC-ADPESCA), Salvador Ortega Plath, debidamente acreditado, procedió a inspeccionar el camión Placa No. C-R24805, Color azul, propiedad de Denis Francisco Quiroz Quiroz, y a la vez quien transportaba la carga de marisco observando el perito Ortega Plath que en el interior del camión habían cinco termos conteniendo colas de camarón de cultivo siendo llevados a granel y un termo con hielo. Por el hecho de observar que los camarones transportados iban a granel el perito de ADPESCA levanta el acta respectiva y procede a retener el vehículo en mención en observancia de los artos. 226, 227 de la Ley No. 489 y procede a custodiar al vehículo referido con el marisco contenido dentro del mismo y el hoy acusado Quiroz Quiroz trasladándose a NICAFLASH, Managua, ya que en dicho lugar hay mejores condiciones sanitarias y de seguridad para continuar con la inspección iniciada así como garantizar la calidad y estabilidad del producto. En el trayecto de Rivas a Managua, Quiroz Quiroz le propuso al perito Ortega Plath que le permitiera botar la cola de langosta que llevaba de forma ilegal y que le iba a ayudar económicamente.

2.- El día 11 de septiembre del año dos mil seis a eso de las nueve de la mañana en la procesadora de pescado NICAFLASH ubicada en el kilómetro quince y medio carretera panamericana en Tipitapa, se continuó la inspección en el camión placa C124805, estando presente el hoy acusado Quiroz Quiroz y otros testigos y fue a las

tres y cuarenta de la tarde que la perito Rosa Virginia Tórrez Orozco Inspectora del MIFIC – ADPESCA que levantó acta de la inspección No. 0123 donde queda plasmado que Denis Francisco Quiroz Quiroz transportaba ilegalmente camarón a granel sin el embalaje y sin el debido empacado, también se constató que el acusado transportaba ocho mil setecientos setenta y siete punto cincuenta libras de camarón y que en Aduanas en el Centro de trámites de las Exportaciones (CETREX) solamente declaró dos mil seiscientos ochenta y cinco libras de camarón transportando ilegalmente seis mil noventa y dos libras de camarón.

3.- Seguidamente en la inspección se le encontró al acusado que transportaba Langosta PANULARIS Aarhus (langosta espinoza del caribe) debajo de la talla permisible, de acuerdo con lo establecido en el arto. 34 capítulo III de las medidas de ordenamiento de la Ley 489 Ley de Pesca. Se realizó el pesaje de todo el marisco así como el muestreo de langostas, seleccionando cinco cajillas con dieciocho muestras teniendo todas unas tallas inferiores a la establecida.

Elementos de convicción que sustentan la acusación

Testificales:

Eduardo Jose Saballos Almendares, de 33 años de edad, cedula de identidad No. 281-130873-0019R, Procurador Ambiental con domicilio en Masaya Villa Bosco Monge Grupo C-285-286.

Edwin Poveda Zamora, Investigador Policial del Distrito Ocho Tipitapa con domicilio en la Policía Nacional de Tipitapa.

Jairo Palacios, inspector de la Policía Nacional con domicilio en la Policía Nacional De Tipitapa.

Periciales:

Salvador Ortega Plath, mayor de edad, con cédula de identidad 001-080957-0031S, carnet de Inspector de ADPESCA No. 0123 centro de trabajo ADPESCA, Tipitapa-Managua. Con domicilio Ameritas No. 1 Grupo A anden 9 No. 2132.

Jose Ramón Martínez Martínez, Procurador Ambiental, con cédula de identidad No. 001-010562-0080, de 44 años de edad, Ingeniero en Ciencias Agrarias, centro

de trabajo en la Procuraduría General de la República ubicada frente a Restaurante los Ranchos y con domicilio en el Barrio José Dolores Estrada, de la Iglesia Católica 1 c. al este ½ c. al lago.

Documentales:

Acta de Inspección de MIFIC-ADPESCA, No. 0027 realizada por el inspector Salvador Ortega Plath el día 10 de septiembre del 2006.

Acta de inspección de ADPESCA No. 0123, con fecha del 11 de septiembre del 2006 realizada en el camión placa C124805 azul el cual contenía 8,777.50 libras de colas de camarón de cultivo y 692 de colas de langosta atlántico (*panulirus Aarhus*) 6 termos, 1 bin adherido al camión con 3 compartimientos y se encontró además que la langosta está por debajo de la talla permisible por la ley y colas de camarón en peso mayor que el reflejado en los documentos que portaba el acusado.

Fijación fotográfica digital, permiso de certificado sanitario de exportación, de productos, subproductos y materiales biológicos de origen animal emitido por el MAGFOR No. 00003232 certificando las 2685 libras de camarón de cultivo procesado y congelado con factura No. 0475.

Calificación legal

Los hechos antes descritos realizados por el acusado Denis Francisco Quiroz Quiroz constituyen el delito de aprovechamiento ilegal de recursos naturales arto. 18 de la ley 559, artos 138 de la ley 217, ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

Solicitud de trámite

Por lo antes expuesto solicito a su autoridad:

- 1.- Se de tramite a la presente acusación y sea admitida por reunir los requisitos de ley de conformidad al arto. 77 y 257 del C. P. .P.
- 2.- Se realice audiencia preliminar de conformidad al arto. 255 C. P. P. en vista que el acusado se encuentra privado de libertad.
- 3.- Se realice dicte prisión preventiva en contra del acusado de conformidad a los artos. 167 literal k) 173 numerales 1, 2 y 3 inciso a y c. arto. 174 Numerales 1, 2 y 3 del C. P. P. siendo el caso que estamos en presencia de un delito grave que merece pena privativa de libertad y que el acusado detenido legalmente no tiene arraigo en

nuestro país ya que ciudadano costarricense, circunstancia que puede ser acreditado con los documentos de viaje que están ocupados por las autoridades de auxilio judicial del Departamento del Distrito VII de Managua.

Para notificaciones señalo las oficinas del Ministerio Publico Managua kilómetro 4 carretera a Masaya.

Managua, trece de septiembre del año dos mil seis.

Firma del Fiscal

Luego de analizar detenidamente dicha acusación se puede observar que esta reúne todos los requisitos de ley, a como se especifica a continuación:

- 1) Aparece primeramente el Juzgado ante quien se interpuso la acusación: Juzgado Local Penal del Municipio de Tipitapa, Departamento de Managua.
- 2) El nombre y cargo del Fiscal: Manuel Antonio Jacamo Ramírez, con credencial No. 00382.
- 3) Nombre y generales de ley del acusado: Denis Francisco Quiroz Quiroz, mayor de edad, con numero de pasaporte 612163599, numero de cedula 6121635, de nacionalidad costarricense, en Barranca Puntarenas.
- 4) Nombre y generales de ley o datos que sirvan de identificación del ofendido o victima, si se conocen: El medio ambiente y los recursos naturales de la Republica de Nicaragua.
- 5) La relación clara, precisa, especifica y circunstanciada del hecho punible, la participación del acusado en el,: se establecen estos requisitos en la relación de hechos de la acusación pues se señala el la hora, día, el lugar, los medios y el modo en que el acusado transportaba mariscos sin autorización alguna por las Autoridades del Ministerio de Fomento Industria y Comercio Administración Nacional de Pesca y Acuicultura (MIFIC – ADPESCA) que es la institución administrativa del Estado que regula y controla la explotación y aprovechamiento de recursos marítimos conforme la Ley de Pesca Ley 489. Se establece su posible calificación legal y los elementos de convicción que la sustentan disponibles en el momento, señalándose que

conforme el arto 18 de la Ley 559 se califica provisionalmente el delito por aprovechamiento ilegal de recursos naturales. Asimismo se señalan los elementos de convicción que sustentan la acusación disponibles en ese momento, siendo estos testificales, periciales y documentales.

- 6) Se señala la solicitud de trámite así como el lugar y fecha, y firma del Fiscal.

11. La Contaminación del suelo y subsuelo²²

Se trata de un delito de peligro y de resultado a la vez. Es de peligro por dos razones: En primer lugar, en relación con el recurso “suelos y subsuelos”, los verbos descargar, depositar o infiltrar las sustancias descritas en el tipo penal, no exigen que se produzca su efectiva contaminación. En segundo lugar, puede considerarse un delito de resultado en relación con el bien jurídico salud pública y los otros componentes del ambiente, en el sentido de que el elemento normativo de modo exige que se ocasione daños a la salud, a los recursos naturales, la biodiversidad, calidad del agua o a los ecosistemas en general. Lo anterior nos podría hacer pensar que el fin último de la norma no es la protección de los suelos por si mismos, sino solo en función de los otros recursos que se enumeran, pero lo cierto es que, el tipo penal incluye los daños o peligro a los recursos naturales y como se considera al suelo como un recurso natural, este delito se aplicará aunque solo exista daño o peligro para el recurso suelo aunque no lo exista para los otros recursos mencionados.

²² Artículo 365 Ley 641.- Contaminación del Suelo y Subsuelo. Quien, directa o indirectamente, sin la debida autorización de la autoridad competente, y en contravención de las normas técnicas respectivas, descargue, deposite o infiltre o permita el descargue, depósito o infiltración de aguas residuales, líquidos o materiales químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes tóxicos en los suelos o subsuelos, con peligro o daño para la salud, los recursos naturales, la biodiversidad, la calidad del agua o de los ecosistemas en general, será sancionado con pena de dos a cinco años de prisión y de cien a mil días multa.

Las penas establecidas en este artículo se reducirán en un tercio en sus extremos mínimo y máximo, cuando el delito se realice por imprudencia temeraria.

En este tipo penal se mencionan las sustancias objeto de descarga, depositado o infiltración en los suelos y subsuelos y dice que son: aguas residuales, líquidos o materiales químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes tóxicos. Las aguas residuales son las que resultan de los procesos industriales, pero también las llamadas aguas servidas que pueden ser, incluso, las de uso doméstico, lo que da gran amplitud a los alcances del tipo penal. En segundo lugar se mencionan los líquidos o materiales químicos o bioquímicos, elementos que tampoco restringen los alcances de la norma, ya que puede tratarse, por ejemplo, de aguas jabonosas de lavado de ropa o cloros.

Finalmente, los elementos “desechos o contaminantes tóxicos”, podrían restringir un poco el ámbito de conductas reguladas, pues la toxicidad presupone un alto grado de probabilidad de daño. Sin embargo, se concluye que la gama de conductas cubiertas por el tipo penal es enorme y lo único que podrá utilizarse para reducir el ámbito de aplicación, es el elemento daño o peligro de daño a la salud y al ambiente, en conjunto con otras condiciones como la cantidad y calidad de las sustancias depositadas.

En la tramitación y resolución de los casos por contaminación de suelos o aguas, debe tomarse en cuenta según el tipo de delito, la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales, el Decreto N° 33-95, sobre Disposiciones para el Control de la Contaminación proveniente de las Descargas de Aguas Residuales Domésticas, Industriales, la Ley 423, Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud, Decreto N° 001-2003 y las disposiciones sanitarias.

El artículo 365 del Código Penal, prevé la contaminación dolosa o por imprudencia temeraria. Sin embargo, en el caso de la conducta dolosa, no es necesario que el dolo sea directo, puede existir el dolo eventual, el cual se puede demostrar por el deber del sujeto activo de conocer la peligrosidad de las sustancias que maneja y por las condiciones y el lugar en donde las mismas son manipuladas. En el análisis de la

conducta se debe tomar en cuenta los factores culturales, económicos y territoriales, en relación a la lesividad del bien jurídico protegido conforme al artículo 7 CP.

Sin perjuicio de las demás formas de participación, se perseguirá a cualquier persona física (incluyendo directores, socios, partícipes y administradores de una persona jurídica) que realice directa o indirectamente la acción. De acuerdo con su participación, esta persona será autor directo o mediato. El autor mediato es aquel que tiene el poder de dirección y, generalmente, da las órdenes en una empresa o instalación, de manera que puede tratarse tanto del dueño, como del administrador, gerente o capataz. En el caso de los autores directos con poco y ningún poder de decisión, se debe valorar cada caso concreto para determinar su grado de responsabilidad que no va a ser equiparada al grado de la responsabilidad del autor mediato por las circunstancias propias de su menor implicancia en la decisión ilícita.

Por otra parte, el tipo penal incluye a quienes autoricen estas conductas, lo que hace referencia a los funcionarios públicos que tienen la potestad de otorgar permisos o autorizaciones y lo realizan en forma contraria a la ley. Finalmente, se sanciona a quienes permitan las acciones, que pueden ser tanto los funcionarios encargados de control, vigilancia o protección, como los mismos responsables de las empresas que, conociendo el contenido ilícito de la conducta, la permiten en contra de la ley.

Uno de los fines por los que se crean los delitos de peligro concreto es sancionar expresamente la producción del resultado, por lo que procesalmente la tentativa no se aplica en estos casos. En este caso, el delito no admite la tentativa, porque la acción no puede dividirse en varios actos o, en otras palabras, el delito no admite un fraccionamiento de la acción, por tanto no se acepta la posibilidad de que un sujeto que se disponga a depositar, descargar o infiltrar las sustancias contaminantes y que no lo logre por circunstancias ajenas a su voluntad, pueda ser perseguido por este delito en grado de tentativa. Será necesario que el sujeto activo ya haya iniciado la acción de depositar, descargar o infiltrar.

En los casos por contaminaciones de aguas, suelos o aire, el Instituto de Medicina Legal cuenta con un laboratorio de toxicología. Existen también laboratorios privados, estos deberán contar con los equipos y el personal especializado en la materia.

El Decreto 33-95, estableció el Plan Gradual de Contaminación Ambiental, para que la industria fuera realizando sus sistemas de tratamiento y adecuarse a las normas técnicas establecidas. Los sistemas de tratamiento serán controlados por el MARENA, EL MINSA y las Alcaldías. Este Decreto también establece los límites permisibles tolerables, dependiendo de la actividad que se realiza. Por lo que es recomendable quien ejerce la acción debe dar prioridad a los casos donde se manejen contaminantes peligrosos y que no hayan construido sus sistemas de tratamiento. También deberán tomar en cuenta que cuando existan sistemas de tratamiento adecuados se deberá realizar estudios de laboratorio para determinar si se superaron los límites permisibles. En caso de que no se tengan sistemas de tratamiento adecuados todo contaminante vertido por la industria o por cualquier particular, puede considerarse delictivo y no será necesario el estudio de laboratorio, porque no se requiere demostrar que se superó el límite permisible. En estos casos, solo se realizarán estudios de laboratorio cuando no se sepa cual es la sustancia que se está liberando al ambiente, o cuando sea necesario para demostrar que el infractor realizó la acción de descargar, depositar o infiltrar los contaminantes. Lo anterior se fundamenta en el hecho de que al tipo penal de contaminación de aguas, no le interesa la superación o no de los límites permisibles, sino solamente la existencia de un daño o peligro a la salud o al ambiente. De esta forma el límite permisible, será solo un parámetro para determinar si la empresa que cuenta con sistemas de tratamiento, está cumpliendo o no.

12. Delitos forestales

En los últimos años las áreas de bosques de nuestro país han experimentado un continuo deterioro debido a la tala ilegal, el avance de la frontera agrícola, el uso de la quema en los cultivos, manejo poco sostenible del recurso forestal, la inoperancia de las instituciones gubernamentales vinculantes y la falta de recursos financieros y humanos suficientes para asegurar la protección, conservación y uso sostenible de los mismos.

Como resultado cada año se pierde en Nicaragua anualmente 70 mil hectáreas de bosques aproximadamente lo que a su vez ocasiona que se degraden los suelos, desaparezcan las especies y se pierda la biodiversidad, esto solamente para mencionar apenas algunas de las graves secuelas observadas actualmente en las zonas donde existen remanentes de bosques.

Del año de 1999 al 2005 el volumen de recursos forestales explotado ha pasado de 74,918 m³ a 159,146.7 metros cúbicos lo que significó un incremento de 112.4 % de lo extraído de manera legal a nivel nacional. La leña es el principal uso asignado al bosque, representa más de 12 veces el consumo de la industria. En 1983 el consumo anual de madera para combustible ascendía a 3.7 millones de metros cúbicos, lo que representa un consumo promedio por habitante de 0.85 toneladas por año. Con relación al volumen total acumulado de madera en el periodo de 1999 al 2005 se extrajo de los bosques de Nicaragua 1, 075,481.1 metros cúbicos de los cuales el 47.3 % representa madera de pino y el 52.7 % corresponde a madera de especies latifoliadas, esto no lleva a la conclusión que Nicaragua ha perdido la mayor parte de su patrimonio natural.

Para el año 2004, INAFOR reportó 77,580 hectáreas bajo planes de manejo forestal es decir un 2% del área total. El sector forestal-madera representa tan solo el 3% del PIB, y un importante segmento de la madera utilizada ni siquiera se extrae de los bosques, sino de sistemas agroforestales.

Los recursos forestales del país están bajo una fuerte presión por el avance de la frontera agrícola. Se estima que cada año se destruyen entre 50,000 y 70,000 hectáreas de bosques para fines agropecuarios, casi todos bosques latifoliados en la región oriental del país. Para esta región el INAFOR registró para el 2004 una extracción autorizada de 78,000 metros cúbicos, es decir poco más que 1 metro cúbico por hectárea deforestada. Aún así se estima una cuota de tala ilegal, la madera que se aprovecha representa una mínima parte de la madera que se destruye por el despale, tal vez el 1%.

La extracción ilegal de madera, por otro lado, parece seguir una tendencia opuesta, siendo mayor en los bosques de pino. De acuerdo a una reciente estimación, la tala ilegal podría llegar a 30,000-35,000 metros cúbicos para las maderas latifoliadas y 110,000-135,000 metros cúbicos para la madera de pino.

El comportamiento inverso de estos dos fenómenos sugiere una limitada relación de causa y efecto. Aún así, la respuesta política e institucional a la deforestación se ha enfocado en la búsqueda de medidas que puedan reducir la extracción ilegal, mientras la tala con fines agropecuarios (que representa el 99% de la destrucción) solamente encuentra resistencia de las autoridades cuando afecta las áreas protegidas.

Después que el aprovechamiento forestal comenzó a ser regulado, a finales de los años setenta, la inversión en la industria de madera casi se paró. Entre 1975 y 2000 la capacidad instalada en los aserríos bajó prácticamente a la mitad, y la producción de madera aserrada se redujo de 400,000 a 150,000 metros cúbicos.

Dada la gran incidencia de casos donde se produce la explotación descontrolada de nuestros recursos forestales y que ello en gran parte ha contribuido a aumentar la pobreza de nuestro país dejando a nuestras futuras generaciones en un nivel de vida mas deplorable que el que actualmente se vive en nuestro país, es que todas las

partes involucradas en esta materia debemos ocuparnos de entender y aplicar los términos, conceptos, procedimientos y leyes que se vinculan indistintamente para resolver dichos casos de manera acorde con el espíritu de las leyes ambientales, ello sin obviar que al afectarse un recurso forestal se causa un daño a uno de los patrimonios mas importantes de nuestro país por su diversidad, cobertura y beneficios que brinda al ser humano y al ecosistema en general.

En Nicaragua en el transcurso de su desarrollo histórico, social, político y económico ha habido diversas normas que han regulado lo concerniente a los recursos forestales. Se tiene conocimiento que la primera norma que regulo lo relacionado a los recursos forestales fue el Decreto 1381 denominado Ley de Conservación, Protección y Desarrollo Sostenible de las Riquezas Forestales del país publicado en la Gaceta, Diario oficial No. 63 del 21 de junio de 1905. Posteriormente en 1967, se aprobaron leyes que incluían en sus títulos palabras como “conservación” y “protección” de los bosques, la política forestal del país se centro por muchos años en regular las concesiones forestales y liberar tierras para fines agropecuarios.

La protección de los bosques llega a ser una política oficial en 1976 con la aprobación de la “Ley de emergencia sobre aprovechamiento racional de los bosques”²³. Con esta ley el Estado define que es de “interés público el aprovechamiento racional de los recursos forestales del país, y la conservación de los mismos”. Es decir que para el Estado los bosques se convirtieron en un bien a proteger bajo un uso racional.

La ley introduce la “guía forestal” que es un documento que acredita la legalidad de un lote de madera, y de esta manera da lugar al sistema de control ex-situ, el cual con el tiempo se ha desarrollado a ser el método central para la protección de los bosques.

²³ Ley No. 235 Ley de Aprovechamiento racional de los bosques del 3 de marzo de 1976 publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 59 del 10 de marzo de 1976.

Esta ley, además, contenía varias regulaciones restrictivas o prohibitivas de la explotación forestal. La implementación de sus directrices, de parte de un Estado que hasta ese momento había fomentado la conversión de los bosques en tierras agrícolas, comprensiblemente no podía darse de un día para otro. En la práctica algunas de las medidas se han ido adoptando gradualmente, mientras otras – las más drásticas – han pasado a la historia sin nunca haber sido aplicadas.

En los años ochenta el gobierno de la revolución sandinista hizo ciertas modificaciones en esta política forestal, a través de una serie de leyes y decretos puntuales, pero sin promulgar una nueva ley general. La novedad principal de la política forestal durante esa época fue la nacionalización de las empresas madereras, que trataron de desarrollar operaciones forestales en las zonas consideradas de vocación forestal. Sin embargo, el desenvolvimiento del conflicto armado, que era más intenso en las zonas forestales, frenó estas actividades así como los asociados intentos de manejo forestal.

A inicios de la década 90 se hace un esfuerzo de ordenar el sector forestal, con la formulación del Plan de Acción Forestal, conocido como PAF-NIC. El plan no fue implementado directamente, pero varias de sus ideas se retomaron en el Reglamento Forestal²⁴, aprobado en 1993, el cual fue una versión más flexible y técnicamente mejor elaborada de la ley de 1976, pero básicamente con la misma filosofía.

En 1998 las competencias en materia forestal fueron trasladadas del MARENA²⁵ al MAGFOR²⁶, creando bajo la rectoría de este ministerio una nueva entidad semi autónoma, el INAFOR²⁷, con la función específica de reglamentar y controlar el

²⁴ Reglamento Forestal, Decreto No. 45-93, del quince de octubre de 1993, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 197 del 18 de octubre de 1993.

²⁵ Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.

²⁶ Ministerio Agropecuario y Forestal (antes del traslado de las funciones en materia forestal este ministerio era llamado Ministerio de Agricultura y Ganadería).

²⁷ Instituto Nacional Forestal.

aprovechamiento racional de los recursos forestales. Sin embargo, en el caso de las áreas protegidas (reservas), aunque el INAFOR administra permisos pero el pronunciamiento del MARENA es vinculante.

En 2003, después de años de debates y procesos de concertación, fue aprobada la Ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal²⁸ y decretado su respectivo Reglamento²⁹. Por primera vez esta ley introduce elementos de fomento, ya que se ofrecen ciertos incentivos para el establecimiento de plantaciones forestales, el manejo forestal planificado y la industria de segunda transformación. En lo general se tratan de instrumentos de “fomento pasivo” que requieren que el interesado se movilice hacia las oficinas gubernamentales para obtener un incentivo en su mayoría de orden fiscal. No se observa ninguna medida que genere un acercamiento hacia la mayoría de productores rurales que actualmente no sienten vocación para el manejo forestal. Básicamente, los incentivos de la Ley Forestal no parecen más que compensaciones por la carga administrativa y las restricciones que se imponen a los productores forestales. Esta ley forestal determina que el propietario del suelo le corresponde el dominio del suelo forestal y sus beneficios pero siendo responsable de su manejo.

La ley forestal crea el Sistema Nacional de Administración Forestal (SNAF) el cual está integrado por entidades involucradas en el sector forestal. Esta ley ratifica que las entidades que conforman el SNAF son aquellas que por competencia y funciones lo tengan establecido en la Ley 290 (Ley de organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo), así como la Ley 28 (Ley de Estatutos de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua) y la Ley 40 y 261 (Ley de Municipios y sus reformas), que en general definen que los Consejos Regionales de las regiones autónomas y municipios tienen competencia en el desarrollo socio-económico y conservación de los recursos naturales de sus

²⁸ Ley No. 462, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 168 del cuatro de septiembre del dos mil tres.

²⁹ Decreto No. 73-2003 (Reglamento de la Ley No. 462, Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal).

territorios y tiene el derecho y deber de resolver bajo su responsabilidad todo los asuntos de sus comunidades dentro del marco de la constitución y otras leyes nacionales.

En el artículo 41 de la Ley Forestal No. 462 le adscribe al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), la Administración Forestal Estatal (ADFOREST), con carácter desconcentrado, para la administración y manejo sostenible de los bosques estatales, se exceptúan las áreas protegidas que están bajo la administración del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y Parques Nacionales que están bajo el MARENA. ADFOREST tiene la facultad de otorgar concesiones mediante consulta en cada una de las regiones, y a la vez tiene la responsabilidad de dar monitoreo a los bosques y concesionarios.

Esta Ley 462 introduce algunas importantes novedades creando las figuras de los regentes y auditores forestales como un profesional forestal acreditado por el INAFOR, y además estableciendo la posibilidad de delegar algunas funciones de administración, control y vigilancia de los gobiernos locales, a través de convenios con el INAFOR. El Regente Forestal debe garantizar la ejecución de los planes de manejo, y será contratado directamente por la empresa o persona responsable del plan de manejo. El Auditor forestal es una figura que no es operativa, pero tiene la función de la verificación de que el manejo forestal ha sido ejecutado bajo la ley, y esta figura estaría pagada directamente por el Estado.

El marco legal del sector forestal ha sido ampliamente modificado a mediados de 2006, con la entrada en vigencia de dos nuevas leyes: la Ley de Delitos Ambientales³⁰ y la Ley de veda forestal³¹. La primera es una ley general sobre violaciones y daños contra el medio ambiente, que refiere artículos concernientes a los delitos en materia forestal, tipificando las sanciones penales respectivas. Por otro

³⁰ Ley No. 559 de 2005 (Ley Especial de Delitos Contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales).

³¹ Ley No. 585 de 2006 (Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento y Comercialización del Recurso Forestal).

lado, la Ley de veda forestal es una ley con un acentuado porte conservacionista, cuyo objetivo es restringir fuertemente las actividades de extracción y comercio forestal, tanto respecto a algunas especies arbóreas como respecto a algunas áreas específicas del territorio nacional.

El Reglamento Forestal creó la Comisión Nacional de Bosques y Desarrollo Forestal, conocida como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como un órgano estatal de coordinación y consulta interinstitucional del Sector Forestal Nacional. En ella están representadas instituciones del gobierno central como MARENA, el Ministerio de Economía y Desarrollo, el MAGFOR, el director del INAFOR, un representante del sector forestal privado y un representante del gremio de profesionales forestales del país. La Ley 290 añadió a representantes de gobiernos regionales de las Regiones Autónomas y a un representante de las organizaciones ambientalistas no gubernamentales. Entre las funciones del CONAFOR esta la aprobación de la política forestal, conocer de las concesiones forestales que otorgue el Estado, recibir trimestralmente informes del INAFOR sobre la administración de permisos, y recibir del FONADEFO³² un informe de uso del fondo.

En noviembre del 2005, se establece un grupo de gobernanza (GOFO) con la participación de Instituciones del Sector Público Forestal (MAGFOR, INAFOR, MARENA, FONADEFO), Gobiernos de Regiones Autónomas (RAAN, RAAS), Representantes Municipalidades (AMUR, AMUNSE), Representantes del Sector Privado (Comité de Desarrollo departamental Nueva Segovia), y la Cooperación internacional (GTZ, SNV, FAO). Este grupo identificó, concensuó y priorizó los problemas del sector forestal, y se propuso trabajar conjuntamente en ciertas líneas de trabajo orientadas al fomento a lo largo de la cadena forestal productiva, revisión de la tramitología para simplificar el acceso al uso legal del recurso forestal, apropiación y congruencia del marco legal forestal y ambiental, monitorear el

³² El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO) es administrado por el INAFOR para la reposición y manejo forestal sostenible en las cuencas hidrográficas nicaragüenses, de acuerdo al Art. 23 Inc.5 de la Política Nacional de Desarrollo Sostenible del Sector Forestal de Nicaragua aprobada por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) el 3 de junio del 2008.

proceso de descentralización y desconcentración de la administración forestal del Estado.

En el tema de las buenas practicas forestales, los estándares de manejo a unidad de manejo forestal se elaboran por primera vez en 1996 y en el 2001 son oficializados para el seguimiento y monitoreo de la biodiversidad por tipo de ecosistema que fueron elaborados por diferentes instituciones como MARENA, INAFOR, ONGs y proyectos con el fin de tener un marco de referencia que determinase un manejo forestal sostenible. Constantes cambios institucionales han troncado el proceso de evolución de los criterios e indicadores, gracias a ONGs y la cooperación internacional ha rescatado el proceso. De mismo modo, en 1996 varias organizaciones agrupadas en el Consejo Nicaragüense de Certificación Forestal Voluntaria (CONICEFV) empiezan a trabajar en Nicaragua para adoptar el sistema de acreditación del FSC (Consejo Mundial de Bosques). Entre las tareas que se propuso el CONICEFV fue la promoción de la certificación, y la formulación de estándares de manejo de bosque natural que se presentaron en el año 2000 al FSC. La estrategia del CONICEFV es hacer el trabajo de la certificación más transparente y vender la idea de que el manejo forestal en el país se hace de forma responsable y sostenible.

La tala y el comercio ilegal de madera y productos forestales no es algo nuevo en nuestro país: estas actividades se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. Tampoco son las prácticas ilegales una exclusividad del sector forestal; muchos otros productos se producen y comercializan de forma ilegal.

Existe una gran confusión con respecto a la definición y el alcance de los diferentes delitos forestales debido a que abarcan un amplio espectro de actividades, desde las diversas prácticas de extracción ilegal hasta actividades de contrabando, comercio ilegal, fijación ilegal de precios y clasificación ilegal de maderas, comercio no documentado y comercio ilegal de especies incluidas en los apéndices de la

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

En vista de esta confusión, resulta útil separar cada uno de los conceptos de los delitos forestales sin hacer de un lado que la tala y el comercio ilegal están relacionados y vinculados entre sí, todo con el objeto de efectuar una correcta aplicación de las normas relacionadas a los delitos forestales.

Es necesario establecer mecanismos de coordinación para precisar y determinar el contexto de aplicación de las leyes forestales y para lograr esto se deben cumplir una serie de condiciones previas relacionadas con una diversidad de aspectos tales como la planificación, el aprovechamiento, las relaciones comunitarias, o el régimen tributario, entre otros. La mayoría requiere el apoyo de normas, reglamentos, disposiciones e instrumentos legales apropiados para reglamentar la conducta de todos los actores a fin de asegurar la observancia y cumplimiento de normas para el correcto desempeño del sector forestal. En conjunto, estas normas, reglamentos, disposiciones e instrumentos legales se pueden denominar “legislación forestal nacional”.

El problema no radica tanto en el establecimiento de la legislación forestal nacional, sino en su cumplimiento y observancia. La responsabilidad de la formulación y aplicación de las leyes forestales nacionales recae en todas las instituciones vinculadas a este sector es un problema interno y nacional. Además de formular y aplicar leyes forestales nacionales apropiadas, las autoridades pueden también tomar medidas adecuadas para controlar las actividades ilícitas forestales manteniendo un registro de las actividades y recopilando datos sobre la extracción y producción de madera, el rastreo de la madera en troza, los sistemas de códigos de barras para la identificación de la madera, y la certificación.

El comercio ilegal de productos forestales es diferente y más complejo, porque puede darse a nivel nacional o internacional, o ambos, y se relaciona no sólo con las

leyes forestales nacionales, sino también con otras leyes nacionales e internacionales, que pueden incluir legislación sobre empresas, comercio, bancos, auditorías, aduanas, impuestos, etc. La peor situación posible es una combinación de tala ilegal con comercio ilegal tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Debe crearse conciencia en todas las autoridades vinculadas a la protección de nuestros recursos forestales sobre todo deben establecerse mecanismos para una regulación y control efectivo de las conductas ilícitas forestales especialmente para aprovechar los escuálidos recursos económicos y humanos con que cuentan dichas instituciones y para establecer parámetros para la ejecución de las acciones tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal. En este sentido es que es importante la aplicación del derecho penal ambiental para esclarecer aquellas conductas donde se ha provocado una mayor afectación al bien jurídico tutelado como son los recursos forestales.

Es importante dotar y capacitar a los investigadores y peritos de la Policía Nacional de material, instrumentos y estudios en la rama forestal para coadyuvar en una correcta y eficiente investigación de los delitos forestales. La solución del problema radica en la adopción de medidas apropiadas en el plano nacional e internacional con el fin de: asegurar un cumplimiento, control y supervisión más estrictos; reducir y eliminar los incentivos para prácticas ilegales aumentando los costos y riesgos de tales prácticas; limitar e impedir el acceso a los mercados de productos forestales comercializados de forma ilegal; aplicar un proceso de verificación de la legalidad del movimiento de productos forestales por terceras partes independientes; mejorar la cooperación y coordinación internacional y proceder al ejercicio de la acción penal sobre todo en aquellos casos que por su gravedad han ocasionado mayores daños a nuestros recursos naturales. Debe establecerse mecanismos de capacitación a los operadores de justicia en cuanto a establecer lo que conlleva un delito forestal como un nuevo delito en nuestra legislación penal para que los planteamientos de la partes tenga sustento legal y en base a ello se dicten resoluciones apegadas a derecho.

Con la entrada en vigencia del Código Penal Ley No. 641 a partir del nueve de julio del dos mil ocho, quedan regulados como delitos forestales los contemplados en los artículos 373, 381, 383 al 388 y 390, correspondientes al capítulo III, Delitos contra los Recursos Naturales del Título XV Construcciones prohibidas y delitos contra la naturaleza y el medio ambiente y que se denominan respectivamente así:

- 1.- Aprovechamiento ilegal de recursos naturales.
- 2.- Comercializaron de fauna y flora.
- 3.- Incendios forestales.
- 4.- Corte, aprovechamiento y veda forestal.
- 5.- Talas en vertientes y pendientes.
- 6.- Corte, transporte y comercialización ilegal de madera.
- 7.- Corte o poda de árboles en casco urbano.
- 8.- Incumplimiento de estudio de impacto ambiental.
- 9.- Introducción de especies invasoras, agentes biológicos o bioquímicos.

Para una mejor comprensión del tema se ha logrado definir como se expresa a continuación de manera específica lo que es un delito forestal ubicado dicho concepto desde luego dentro de lo que comprende de manera general la rama de los delitos ambientales.

“Delito forestal es toda conducta descrita en una norma de carácter penal cuya consecuencia es la degradación de los bosques naturales, las plantaciones forestales y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de producción y protección forestal y los demás componentes silvestres de la flora terrestre, acuática emergente, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional y que se encuentra sancionada con una pena expresamente determinada.”

12.1. Instituciones vinculadas en la investigación de delitos forestales

El conjunto de instrumentos normativos que regulan la actividad forestal en Nicaragua establece un amplio sistema de control para la verificación de la legalidad

de la producción forestal, basado en la participación de diversas autoridades públicas (a nivel central y local) y también de operadores privados (regentes y auditores forestales). Este arreglo de múltiples agentes tiene, en teoría, el potencial de proporcionar un monitoreo comprehensivo del sector forestal.

En Nicaragua hay varias leyes que otorgan a otras instituciones, y a la ciudadanía en general, importantes funciones en el control y vigilancia del uso de los recursos forestales del país. Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de este contexto, a continuación se examinan algunas funciones del INAFOR, MARENA, la Procuraduría Ambiental³³, la Fiscalía, las alcaldías, el ejército y la policía, y la sociedad civil (tanto grupos organizados como ciudadanos individuales).

De acuerdo a la Ley Forestal Ley 462 el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), bajo la rectoría sectorial del Ministerio Agropecuario y forestal (MAGFOR) tiene por objeto valar por el cumplimiento del régimen forestal en todo el territorio nacional y dentro de otras funciones tiene la de vigilar el aprovechamiento, sostenible de los recursos forestales de la Nación, ejerciendo facultades de inspección disponiendo las medidas, correcciones y sanciones pertinentes de conformidad a las disposiciones establecidas en la referida Ley 462 y su reglamento, por lo que se deduce que la prueba pericial necesaria y fundamental para el ejercicio de la acción penal en un delito forestal la va a constituir el funcionario de INAFOR que conozca de dicho delito forestal pues este es quien va emitir su informe pericial donde se establecerán las indicaciones técnicas que para tal efecto se requiera en la tipificación de un delito forestal.

Por otra parte la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua tienen la responsabilidad de colaborar con el INAFOR y el MARENA en el control del transporte de productos forestales, incluyendo el cumplimiento de las medidas de retención de los productos y medios de transporte cuando sea necesario. La Ley de veda forestal ampliamente expandido el rol de estas autoridades en la vigilancia de

³³ Procuraduría para la Defensa del Ambiente y de los Recursos Naturales.

los recursos forestales, otorgándoles la función de brindar al INAFOR “todo el respaldo operativo y de ejecución, para la aplicación, vigilancia y control efectivo de la veda forestal” (Arto. 12).³⁴

De acuerdo a la Ley de veda forestal, en todas las áreas protegidas “la veda será permanente y por tiempo indefinido y aplicable a todas las especies forestales”, eliminado así la posibilidad de otorgar permisos de aprovechamiento forestal en dichas áreas³⁵. Pero antes de esta ley, la Ley del Medio Ambiente y los Recursos Naturales establecía que en algunas categorías de áreas protegidas sí se podían llevar a cabo actividades de manejo y aprovechamiento forestal. En dichos casos el INAFOR podía emitir un permiso de aprovechamiento sólo después de la aprobación del plan de manejo respectivo de parte del MARENA. El monitoreo de las operaciones de aprovechamiento era una responsabilidad del MARENA, llevada a cabo a través de sus Delegaciones Departamentales. Los funcionarios de la Delegación Departamental podían además controlar el transporte de madera, para corroborar que los cargamentos de madera que salían de las áreas protegidas eran acompañados de su respectiva documentación, y que el producto correspondía a lo indicado en la guía de transporte. Aunque con la Ley de veda forestal estas funciones quedan (por lo menos momentáneamente) suspendidas, a la Delegación Departamental del MARENA le corresponde todavía iniciar los procesos administrativos en el caso de infracciones en materia forestal (esencialmente extracción clandestina de productos forestales y cambio de uso) en dichas áreas.

Otro actor relevante es la Procuraduría para la Defensa del Ambiente y los Recursos Naturales, creada por La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, esta institución tiene la función de ser parte en los procesos ejerciendo la representación y defensa de los intereses del Estado en esta materia.

³⁴ Además, esta Ley “establece una zona de restricción de quince (15) kilómetros desde los límites fronterizos hacia el interior del país, donde no se permite el aprovechamiento forestal para todas las especies, la cual queda bajo vigilancia y control del Ejército de Nicaragua” (Arto. 1).

Además de ser la autoridad responsable de conocer y tramitar las denuncias de carácter penal por delitos forestales, el Ministerio público a través de la Unidad Ambiental también lleva a cabo sus propias inspecciones para investigar daños a los recursos forestales y otros delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales y por la complejidad y novedad de los delitos forestales ha de hacerse una correcta adecuación de los parámetros administrativos que regulan el sector forestal a la concordancia con la tipificación de un delito forestal.

Como se ha analizado en la sección anterior, la Ley No. 462 prevé la posibilidad de establecer convenios de delegación de atribuciones entre el INAFOR y los gobiernos municipales. Sin embargo, independientemente de esta posibilidad, la Ley de Municipios les otorga la facultad de contribuir al “monitoreo, vigilancia y control” del uso racional del medio ambiente y los recursos naturales (Arto. 7 de la Ley de Municipios). Muchas alcaldías ejercen esta función a través de su Unidad Ambiental Municipal (UAM)³⁶, una instancia técnico-operativa que colabora con el Delegado Municipal del INAFOR en el trabajo de supervisión de los permisos de aprovechamiento, participando en las inspecciones y reportando infracciones e ilegalidades. En las dos regiones autónomas, esta función es llevada a cabo por la SERENA³⁷ del Consejo Regional.

12.2. Corte, transporte y comercialización ilegal de Madera.³⁸

³⁶ En el Departamento de Nueva Segovia es llamada Secretaría Ambiental Municipal (SEAM).

³⁷ Secretaría de Recursos Naturales.

³⁸ Artículo 29.- Incendios Forestales. El que provoque de manera dolosa, negligente o incite a otros a la realización de incendios forestales o promueva actividades idóneas para su ejecución, será sancionado con 2 a 4 años de prisión y multa equivalente en córdobas a quinientos dólares (U\$ 500.00) por cada hectárea dañada.

Las personas autorizadas a realizar quemas agrícolas que causen daños fuera del área destinada para la quema, quedan sujetas a las sanciones establecidas en el párrafo primero.

Las personas que realicen quemas agrícolas sin la debida autorización y causen daños fuera del área destinada se le aplicarán en dos veces las sanciones establecidas en el párrafo anterior.

Se exceptúan de estas sanciones las quemas controladas y autorizadas por la autoridad competente.

Artículo 30.- Tala Rasa y Veda Forestal. El que tale en forma rasante, remueva total o parcialmente la vegetación herbácea, o destruya árboles o plantas en terreno estatales, baldíos, comunales, propiedad particular y vías públicas, será sancionado con multa equivalente en córdobas de trescientos (U\$ 300.00) dólares a tres mil dólares (U\$ 3,000.00) dólares.

En la aplicación práctica de lo que en su regulación señalaba el Arto. 32 de la Ley 559 (delito de corte, transporte o comercialización ilegal de madera) se debe hacer una interpretación teleológica y no meramente gramatical ha de deducirse que las acciones de corte, transporte y comercialización son conductas separadas, que se pueden cometer en forma conjunta o independiente. En efecto, según el espíritu de la ley, en cuanto a la sanción de todas las conductas lesivas al ambiente, y la misma redacción de este tipo penal, se concluye que no es posible interpretar que cuando se verifique la conducta del transporte, también haya que demostrar la comercialización, pues sería distinguir donde la ley no lo hace y exigir requisitos de tipicidad que no existen. Tal es así, que las comprobaciones de campo de la comisión de estos delitos se realiza en medios totalmente distintos, el corte se

La pena será aumentada al doble si las actividades descritas en los párrafos anteriores, se realizan en bosques primarios o secundarios en cantidades superiores a tres hectáreas, en áreas protegidas o cuencas hidrográficas. Igual pena se aplicará al funcionario público que lo autorice o lo permita. Se exceptúa el aprovechamiento que se realice con fines de uso o consumo doméstico dentro de la misma comunidad.

El que realice actividades prohibidas en las disposiciones de una veda forestal será sancionado con prisión de 2 a 4 años, además del decomiso del producto y de las herramientas y medios utilizados, incluyendo el medio de transporte usado para estos fines.

Artículo 31.- Talas en Vertientes y Pendientes. El que deforeste, tale o destruya árboles o arbustos, aún siendo el propietario destinados a la protección de vertientes o manantiales naturales o áreas de recarga, será sancionado de 2 a 4 años de prisión y multa equivalente en córdobas de doscientos (U\$ 200.00) a cinco mil (U\$ 5,000.00) dólares, debiendo además sembrar cinco árboles por cada árbol talado de la misma especie.

Igual pena se aplicará al que realice cambios de uso de suelos con vocación forestal sin la debida autorización.

Artículo 32.- Corte, Transporte y Comercialización Ilegal de Madera. El que corte, transporte y comercialice recursos forestales sin el respectivo permiso de la autoridad competente, será sancionado con prisión de dos a cuatro años y multa equivalente al doble del precio de referencia internacional del producto.

Artículo 33.- Corte o Poda de arboles en Casco Urbano. Las personas naturales o jurídicas que corten o poden árboles que se encuentran en los alrededores de una propiedad ubicada en el casco urbano de la ciudad sin el permiso del INAFOR, será sancionado con multa equivalente en córdobas de cincuenta (U \$ 50.00) a un mil (U \$ 1,000.00) dólares.

Las podas de ramas o árboles a orillas de las carreteras, avenidas, calles o bulevares deberán realizarse con el permiso del INAFOR y utilizando las técnicas recomendadas para estos casos, su incumplimiento será sancionado con multa equivalente en córdobas de cincuenta (U\$ 50.00) a doscientos (U \$ 200.00) dólares.

Artículo 34.- Incumplir con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Las personas naturales o jurídicas que deforesten, talen o destruyan, remuevan total o parcialmente la vegetación herbácea, o árboles sin cumplir con los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las normativas técnicas y ambientales establecidas por la autoridad competente, será sancionado de 2 a 4 años de prisión y multa equivalente en córdobas de doscientos (U \$ 200.00) a cinco mil (U \$ 5,000.00) dólares.

comprueba generalmente, en la finca o terreno donde se realizó la tala, mientras que el transporte se da en un momento posterior y se detecta mediante operativos o retenes en carretera, finalmente, la comercialización se realiza en cualquier medio, pero generalmente se comprueba en la industria, sea la de transformación de la madera, como los aserraderos o en los establecimientos de venta al público. Tomando en cuenta además que para una correcta interpretación de estos delitos forestales debemos de auxiliarnos de las definiciones establecidas en la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley 217 y las contenidas en otras leyes de carácter sectorial así como los convenios o tratados internacionales ratificados por Nicaragua en materia ambiental hay que considerar que en el Decreto No. 73-2003 se establece y regula las actividades de corte, transporte y comercialización como actos independientes sustentándose con esta normal penal la tipificación individual de dichas conductas específicamente hay que considerar lo expresado en el art. 38 del Decreto 73-2003 donde se expresa que el INAFOR otorgara permisos de aprovechamiento forestal de una determinada clase de madera por un volumen determinado y en área determinada, así mismo lo relacionado en el art. 66 del Decreto donde se menciona que el titular del permiso de aprovechamiento y el transportista en su caso están obligados a cumplir todos los procedimientos vigentes sobre el aprovechamiento y transporte de los productos y/o subproductos forestales que establece ese reglamento, las normas técnicas y disposiciones administrativas para el manejo sostenible de los bosques tropicales latifoliados de coníferas y plantaciones forestales y además lo que manifiesta el art. 53 numeral 3 de la Ley 462 donde se dispone que se consideran como infracciones muy graves las siguientes: Realizar actividades de corte, extracción, transporte, transformación o comercialización de recursos forestales de forma ilegal o sin certificado de origen, sustentando también esto de que los tipos penales de corte, transporte y comercialización pueden ser tipificado como conductas independientes tomando como base que los recursos forestales que pueden ser objeto del tipo penal del artículo 32, conforme el artículo 4 del Decreto 73-2003, pueden ser madera en rollo, madera aserradas, materias primas forestales (madera de rollo, leña, astillas, resinas, carbón vegetal, y otros). Con la Ley 641 en su artículo 386, al epígrafe del

delito en mención se le hace la corrección gramatical al leerse textualmente el delito como: Corte, transporte y comercialización ilegal de madera para corroborarse lo dicho anteriormente de que estas tres conductas pueden conocerse de manera individual y no en su conjunto.

Esta determinado por la ley de la materia que el INAFOR es la autoridad competente para otorgar permisos de corte de árboles con la excepción que establecen los artículos 7 y 10 de la Ley 462 que permite a las Alcaldías a suscribir convenios con INAFOR para realizar o autorizar el aprovechamiento forestal en el área urbana y resto del municipio de manera conjunta, y en las áreas protegidas la autoridad competente será el MARENA quien autoriza el plan de manejo. En los delitos forestales se debe tomar en consideración que no solo se protege la madera o la leña sino que existen otros productos regulados en el artículo 4 del decreto 73-2003 (reglamento a la ley forestal) y demás normas que regulan la materia forestal.

12.3. Incendios forestales y quemas

El artículo 29 es el único delito de la Ley 559 que contempla la comisión culposa. El delito de incendio forestal se configura tanto por la realización del fuego forestal, como los otros dos supuestos siguientes: cuando las quemas autorizadas causen daños fuera del área autorizada y cuando las quemas no han sido autorizadas y causan daños fuera del área destinada a la quema. En el primer supuesto, es necesario determinar cuales son las condiciones legales de autorización de quemas agrícolas. En el segundo supuesto, es necesario determinar cual es el área destinada, que puede coincidir con los límites de la propiedad del infractor, en el sentido de que causa daño a un tercero o al ambiente. Pareciera que existe contradicción normativa en cuanto a la aplicación de las principales disposiciones jurídicas en lo que se refiere a incendios forestales ya que la Ley 462 regula como una infracción leve el provocar por imprudencia incendio en terrenos forestales como una infracción muy grave negarse a contribuir a participar en la prevención combate y control de plagas, enfermedades, incendios forestales en terrenos propios así como

provocar incendios que afecten los recursos forestales. Sin embargo el legislador incorporo en este cuerpo normativo que las infracciones y sanciones serán aplicables sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que contemplen las leyes respectivas.

Por lo que cabe aclarar que el infractor de la norma en materia de incendios forestales se le podría castigar simultáneamente por medio de tres estatutos jurídicos, primero con las sanciones establecidas en el Decreto 37-98 de medidas de prevención de incendios forestales, segundo con las sanciones establecidas en la Ley 462 y por ultimo con la pena de prisión y días multa que estableció primeramente la Ley 559 y posteriormente el Código Penal vigente.

Con relación al delito de incendios forestales contemplado en el artículo 383 de la Ley 641, a parte de la provocación del incendio forestal o la incitación a provocarlo el delito se realiza mediante otros supuestos: cuando por imprudencia las quemas autorizadas causen daños fuera del área autorizada y cuando las quemas no han sido autorizadas y causan daños en zonas de bosques. En el primer caso es necesario determinar cuales son las condiciones legales de autorización de quemas agrícolas, cual es el área destinada para realizar la quema que en el caso específico puede coincidir con límites de la propiedad del infractor y también se deberá determinar cual es el daño que se causo a un tercero o al ambiente. En el segundo caso bastara que haya un dictamen sobre los daños en la zona de bosque. La determinación técnica de lo que se considera bosque será hecha por la institución rectora INAFOR de conformidad con la definición establecida en el reglamento a la ley forestal y la demás legislación relacionada. Siempre será necesario para el esclarecimiento de los hechos que por medio de prueba pericial se determine si el daño fue causado por una situación fortuita o inesperada.

12.4. Tala rasa y veda forestal

En el artículo 30 de la Ley 559, que contiene el delito de tala rasa y veda forestal se sancionaba la tala en forma rasante, que significa la tala que no es selectiva o, en otras palabras, en la que se cortan todos los árboles de un determinado espacio o ecosistema, independientemente de que en el terreno queden o no los tocones. Esta interpretación prevalece en el Código Penal y se complementa o refuerza por la otra conducta prevista en el tipo penal que es la de remover total o parcialmente la vegetación herbácea.

También se sanciona, por aparte, cuando las acciones se realizan en bosques primarios o secundarios en cantidades superiores a tres hectáreas, en áreas protegidas o cuencas hidrográficas. Asimismo se contemplaba en el párrafo último del arto. 30 de la Ley 559 y actualmente en el artículo 384 del Código Penal las sanciones que se le impondrá a quienes realicen actividades prohibidas en las disposiciones de una veda forestal, por lo que se deduce que la pena para quienes violenten las disposiciones de la Ley 585 Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento y Comercialización del Recurso Forestal serán las que establece el párrafo ultimo del arto. 384 del Código Penal.

A esta disposición hay que agregar que conforme la Ley 585 o Ley de Veda, para el Corte, Aprovechamiento y Comercialización del Recurso Forestal, en su artículo 1, inicialmente se declararon en veda las especies de: Caoba, Cedro, Pochote, pino, Mangle y Ceibo en todo el territorio nacional, veda establecida por un periodo de diez años renovable por periodos similares o mayores, lo que fue variado por el Decreto No. 81-2008, Modificación al artículo 1 de la Ley 585 Ley de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del recurso forestal, aprobado el dos de octubre del dos mil nueve por el Presidente de la Republica, mediante el cual se suspende en todo el territorio nacional la veda para el corte, aprovechamiento y comercialización de árboles de la especie Pino (*Pinus* sp) por un periodo de tres meses el que podrá ser prorrogable, teniendo como soporte los estudios y

recomendaciones técnicas y administrativas presentadas por el INAFOR con la aprobación de la CONAFOR. También existe la Resolución Ministerial No. 029-2006, que incluye en el sistema de vedas de especies silvestres nicaragüenses, en el listado de vedas nacionales indefinidas, a la especie Almendro *Dipteryx panamensis*.

El Artículo 8 de la Ley No. 585 de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del recurso forestal, contempla la disposición relevante: mientras dure la presente veda se prohíbe el transporte y comercialización de árboles de especies señaladas en el artículo 1. Las especies no afectadas por la veda no podrán ser transportadas de seis de la tarde a seis de la mañana y durante los días sábado, domingo y días feriados. Sin embargo, si la persona ha cumplido con los requisitos que establece la ley y reglamento de INAFOR y se encontrara transportando en los días prohibidos por el artículo 8 de la ley de veda, se estaría frente a una atipicidad, porque la conducta no se regula en el Código penal.

En el arto. 384 de la Ley 641 párrafo primero se sanciona de forma genérica la destrucción o remoción total o parcial de árboles o plantas de cualquier tipo y en cualquier terreno sin embargo en el párrafo segundo se sanciona la tala en forma rasante en tierras forestales o de vocación forestal interpretándose lo que es tala rasante como aquella tala que no es selectiva o sea cuando se cortan árboles de un determinado ecosistema independientemente que en el terreno queden o no tocones. En el párrafo tercero se sanciona a la persona que autoriza (funcionario) las talas en tierras definidas como forestales o de vocación forestal para cambiar la vocación del uso del suelo.

12.5. Tala en vertientes y pendientes

A pesar de que el título del artículo 31 de la Ley 559, incluye a las pendientes, en la redacción del tipo penal solo se mencionaron las vertientes o manantiales o áreas de recarga, por lo que no se podrá utilizar este numeral para perseguir el delito de tala en pendientes. También se sanciona en este delito el cambio de uso del suelo con

vocación forestal, cuando se realice sin autorización. Para aplicar claramente la tipificación del delito de tala en vertientes y pendientes debe relacionarse necesariamente el art. 31 mencionado con el art. 57 de la ley 559 donde se establecen las dimensiones de prohibición para cortar árboles y arbustos, expresándose que debe haber un radio de 400 metros arriba de los manantiales que nacen en la montaña y una faja de 200 metros medidos de cada orilla de las vertientes en toda la extensión de su curso o dentro de y un radio igual a 200 metros alrededor de las fuentes que nacen terrenos planos ya sea o no que se transformen o no en corrientes temporales o permanentes.

En el art. 385 del Código Penal Ley No. 641, el delito de tala en vertientes y pendientes se refiere a la tala o destrucción de árboles o arbustos en áreas de pendientes manantiales y vertientes. Como norma penal en blanco nos remite a la ley de la materia de conformidad a la NTON (Norma técnica Obligatoria) 18 001, Inciso 4.1.6 y 4.1.6, se permite la corta de árboles hasta el 35 % de pendiente pero se prohíbe la extracción mecanizada de los mismos, debiéndose interpretar que este delito se comete cuando se tala sin autorización en áreas con pendientes superiores al 35 % o 19.29 % que es el límite establecido por la legislación para considerar un terreno como pendiente. En cuanto a los términos manantiales o pendientes el primero se refiere a los ojos de agua o nacientes, sean permanentes o intermitentes y el segundo a los ríos, arroyos quebradas, y cualquier otro cuerpo de agua que discurra por un terreno. En el caso de las vertientes se interpreta que cometen este ilícito quienes tales árboles que se encuentren ubicados dentro de los doscientos metros medidos horizontalmente a cada lado de la ribera de las vertientes según el artículo 96 de la Ley General de Aguas Nacionales, Numero 620 publicada en septiembre del 2007.

12.6. Acusación por delito forestal

A continuación para una mejor comprensión práctica se relaciona una acusación interpuesta en contra de una persona que cometió delito de Transporte ilegal de

madera, en dicha acusación puede observarse que aunque el arto. 32 de la ley 559 tipifica lo que es el delito de corte, transporte y comercialización ilegal de madera, en el presente caso producto de la interpretación de las normas administrativas que sustentan y auxilian la ley penal especial No. 559 y tomando en consideración que producto de los hechos no cabe proceder a la acusación de las tres actividades de corte, transporte y comercialización ilegal de madera dado que únicamente se cuenta con elementos de convicción para demostrar la actividad de transporte ilegal por ello es que es viable y no vulnera derechos del acusado el ejercer la acción penal únicamente por el delito de Transporte ilegal de madera.

ACUSACION

SEÑOR JUEZ DE DISTRITO PENAL DE AUDIENCIAS DE MANAGUA

EXP. FISCAL No. 4337-06JL.

EXP. POL. No. 0837-06. D- VII.

El suscrito Fiscal Auxiliar -----, en representación del Ministerio Público lo que acredito con credencial No. ---, ante usted con el debido respeto, comparezco de conformidad a los Art. 1, 2 y 4 de la ley No. 559 Ley Especial de Delitos Contra el Ambiente y los Recursos Naturales, Art. 51.1, 77, 80, 89 del Código Procesal penal y Art. 1, 2, 3, 10.4 LOMP formulando acusación en contra de JOSE DOMINGO SUAREZ OROZCO por considerarlo autor en la comisión del delito de: TRANSPORTE ILEGAL DE MADERA en perjuicio del MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES. Por los hechos que a continuación detallare.

Datos de identificación del acusado:

Jose Domingo Suárez Orozco, de 41 años de edad, Casado, conductor, con cedula de identidad No. 449-230165-0001N, con domicilio Empalme San Benito, del Tanque de INAA 3 cuadras al Este 1 cuadra al Norte. Municipio de Tipitapa. Reo no detenido.

Datos de identificación de la víctima:

Medio ambiente y los recursos naturales.

Relación de los hechos:

1.- El día 25 de Julio del 2006 aproximadamente a las diez de la noche, el acusado JOSÉ DOMINGO SUÁREZ OROZCO, conducía de Sur a Norte sobre la Carretera Sur con dirección al Municipio del Crucero y procedente de la Comunidad Barba de Tigre, Municipio de San Rafael del Sur, el vehiculo camión Marca Mercedes Benz, color blanco, placa M 015541, transportando ilegalmente leña en raja y en manojos en la plataforma que de manera descubierta dicho vehiculo tiene en la parte trasera.

2.- Al llegar al kilómetro quince Carretera Sur, Municipio de El Crucero a bordo del vehiculo mencionado el acusado SUAREZ OROZCO es retenido por el oficial de Policía MARIO JOSE PADILLA ESTRADA, quien Realizaba labores de patrullaje y observa dicho oficial PADILLA ESTRADA a simple vista que el acusado SUAREZ OROZCO transportaba leña, por lo cual el oficial PADILLA ESTRADA le solicita al acusado SUAREZ OROZCO, el permiso que emite INAFOR para trasladar el recurso forestal leña, no mostrando el acusado JOSE DOMINGO SUAREZ OROZCO el correspondiente permiso ni guía forestal del INAFOR y únicamente presenta el acusado SUAREZ OROZCO al oficial PADILLA ESTRADA un documento invalido correspondiente a Guía Forestal con numero de serie 0007460 en el que se autorizaba a otra persona de nombre JOSE DANIEL CORDERO para trasladar en fecha del 21 de julio del 2006 recurso forestal en el Municipio de Diriamba, y que tal documento portado por el acusado SUAREZ OROZCO ya había surtido sus efectos y no tenia ninguna trascendencia ni eficacia para autorizar al acusado SUAREZ OROZCO a transportar leña, siendo en consecuencia ilegal el transporte de leña que el acusado SUAREZ OROZCO realizaba en ese momento.

3.- La leña que transportaba ilegalmente el acusado JOSE DOMINGO SUAREZ en el camión Placa M 015541 fue extraída de las especies maderables Cornizuelo, Brazil, Quebracho, Chaperno, Escobillo y Vainillo y tenía un volumen respectivamente de 7.63 toneladas métricas de leña en raja y 3.27 toneladas métricas de leña en manojos. - El precio total de la leña que el acusado SUAREZ OROZCO transportaba ilícitamente asciende a la suma de siete mil quinientos ochenta y nueve córdobas con setenta y seis centavos (C \$ 7,589.76).

Calificación Legal:

Los hechos antes relacionados constituyen el delito de Transporte Ilegal de Madera, previsto y sancionado en el art. 32 de la Ley No 559. Ley Especial de Delitos Contra el Medio Ambiente y Los Recursos Naturales y arto. 8 de la ley 585, “Ley de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del Recurso Forestal”.

Elementos de convicción que sustentan la acusación.

TESTIFICALES:

- 1.- RUDY JORGE FLORES RUIZ, De 26 años de edad, casado, Inspector Policial, con cedula de identidad No. 002-260680-0006N, No. De Chip 10704, con domicilio en la Policía Nacional del Distrito Siete, San Rafael del Sur.
- 2.- MARIO JOSE PADILLA ESTRADA, de 27 años de edad, soltero, oficial de Policía, con cedula de identidad No. 001-240779-0002N, con domicilio en la Policía Nacional del Distrito Siete, San Rafael del Sur.
- 3.- BISMARCK DARIO AGUIRRE GUTIERREZ, de 30 años de edad, soltero, Responsable del Medio Ambiente de la Alcaldía Municipal de San Rafael del Sur, con cedula de identidad No. 002-191275-0002Y.
- 4.- JAVIER CARCACHE CHAVARRIA, De 43 años de edad, casado, Regente Forestal, con cedula de identidad No. 042-290463-0000F, con domicilio en la Ciudad de Diriamba, Texaco dos cuadras al Norte.

Periciales:

- 1.- SUB OFICIAL MAYOR HERSON PEREZ RIVAS, Mayor de edad, Oficial de Inspecciones Oculares de la Policía Nacional, con domicilio laboral en la Policía Nacional del Distrito N° 7 de San Rafael del Sur.
- 2.- JESSEL LINETH PACHECO MEJIA, Delegada Municipal de INAFOR San Rafael del Sur- Villa El Carmen, con domicilio en la Delegación de INAFOR de San Rafael Del Sur.

Documentales:

- 1.- Recibo de ocupación de una Camioneta Mercedes Benz, color Blanco, Placa M015-541, Cargado de leña.
- 2.- Guía Forestal con numero de serie 0007460 en el que se autorizaba al ciudadano de nombre JOSE DANIEL CORDERO para trasladar el 21 de julio del 2006 leña en el Municipio de Diriamba, y que tal documento portado por el acusado SUAREZ OROZCO ya había surtido sus efectos y no tenia ninguna trascendencia ni eficacia para autorizar al acusado SUAREZ OROZCO a transportar leña.
- 3.- Informe de Parte del Delegado de INAFOR de Diriamba Oscar Mercado Padilla.

Solicitud De Trámite:

Por todo lo antes expuesto solicito a su autoridad:

1. - Sé de trámite a la presente acusación y sea admitida por reunir los requisitos de ley, de conformidad al arto. 77 y 257 del C.P.P.
- 2.- Se realice Audiencia Inicial conformidad al arto. 265 y 266 del C.P.P. Por lo que pido se cite a las partes procesales para el día y hora que su autoridad programe dicha audiencia.
- 3.- Se le notifique a la Procuraduría Ambiental en base a los artos. 135 del Decreto 9-96 arto. 2 de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, Arto. 23 y 24 del Reglamento Decreto 31-2004.

Medidas Cautelares:

Solicito se les impongan al acusado José Domingo Suárez Orozco las medidas cautelares contempladas en contenidas en el arto. 167 numeral 1 literales b, c, d, e del C. P. P.

Para notificaciones señalo las Oficinas del Ministerio Público Managua ubicado en el kilómetro cuatro carretera a Masaya.

Managua, nueve de enero año dos mil siete.

Firma del Fiscal

13. Instrumentos para la Gestión Ambiental

El artículo 11 de la Ley 217 “Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”, establece que son instrumentos para la gestión ambiental el conjunto de políticas, directrices, normas técnicas y legales, actividades, programas, proyectos e instituciones que permiten la aplicación de los principios generales ambientales y la consecución de los objetivos ambientales del país, entre estos, los siguientes:

- 1) De la Planificación y Legislación.
- 2) Del Ordenamiento Ambiental del Territorio.
- 3) De las Áreas Protegidas.
- 4) De Permisos y Evaluaciones del Impacto Ambiental.
- 5) Del Sistema Nacional de Información Ambiental.
- 6) De la Educación, Divulgación y Desarrollo Científico y Tecnológico.
- 7) De los Incentivos.
- 8) De las Inversiones Públicas (SNIP).
- 9) Del Fondo Nacional del Ambiente.
- 10) De la Declaración de áreas contaminadas y de las emergencias ambientales³⁹.

Es importante señalar que el artículo 18 del Decreto 9 -96 “Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales” consigna que los

instrumentos para la gestión ambiental deben incorporar en su contenido y aplicación los principios ambientales⁴⁰.

14. Características de la Gestión Ambiental

La gestión ambiental tiene cuatro características esenciales⁴¹, las cuales se detallan a continuación.

a) **Interinstitucional.** El modelo de contrapeso organizacional administrativo, los tres niveles de la organización administrativa del país, el diseño de competencias compartidas ambientales entre los diferentes entes del Poder Ejecutivo, los gobiernos locales y los gobiernos Regionales, hace que la gestión ambiental tenga que realizarse bajo un marco de coordinación y colaboración entre las distintas Instituciones de acuerdo a su competencia.

b) **Multidisciplinaria.**

Los temas ambientales requieren de la participación de distintas experticias, profesionales de las ciencias jurídicas, biológicas, ecología, química, entre otros, por

³⁹ Este listado es enumerativo no taxativo, ya que se observa la ausencia de algunos instrumentos de gestión ambiental que poseen otros países y la doctrina ambiental, ejemplo; "Auditoria Ambiental", la inspección ambiental, la vigilancia y monitoreo etc.

⁴⁰ Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en su Artículo 4.- establece: "El desarrollo económico y social del país se sujetará a los siguientes principios rectores: 1) El ambiente es patrimonio común de la nación y constituye una base para el desarrollo sostenible del país. 2) Es deber del Estado y de todos los habitantes proteger los recursos naturales y el ambiente, mejorarlos, restaurarlos y procurar eliminar los patrones de producción y consumo no sostenibles. 3) El criterio de prevención prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del ambiente. No podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas en todas las actividades que impacten el ambiente. 4) El Estado debe reconocer y prestar apoyo a los pueblos y comunidades indígenas, sean éstas de las Regiones Autónomas, del Pacífico o Centro del país, en sus actividades para la preservación del ambiente y uso sostenible de los recursos naturales. 5) El derecho de propiedad tiene una función social-ambiental que limita y condiciona su ejercicio absoluto, abusivo y arbitrario, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley y de las leyes ambientales especiales vigentes o que se sancionen en el futuro. 6) La libertad de los habitantes, en el ámbito de las actividades económicas y sociales, está limitada y condicionada por el interés social, de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política, la presente Ley y las leyes ambientales especiales vigentes o que se dicten en el futuro. 7) Las condiciones y contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el Estado en las regiones autónomas de la Costa Atlántica deberán contar con la aprobación del Consejo Autónomo correspondiente. En los contratos de explotación racional de los recursos naturales ubicados en los municipios respectivos, el Estado solicitará y tomará en cuenta la opinión de los gobiernos municipales, antes de autorizarlos".

⁴¹ Cfr. M.V. URQUIJO, La Gestión Ambiental, 15.

lo que, no es posible hacer gestión ambiental, si esta no cuenta con el equipo de profesionales capacitados en estos temas.

c) Trans - sectorialidad.

La variedad de aspectos que el medio ambiente ha venido desarrollando, requiere que todos los sectores sean involucrados en los procesos de toma de decisiones y gestión ambiental.

d) Transversalidad.

La convergencia de las actividades económicas, industriales, culturales, sociales y políticas con relación al medio ambiente, dejan claro que su gestión debe ser transversal.

15. Instancias administrativas con funciones en materia ambiental

Hay que tener en cuenta que los delitos ambientales contienen normas penales en blanco o sea que nos remiten a otras normas administrativas para su regulación lo que significa que para tener certeza de que existe un delito ambiental debemos tener conocimiento cual es la norma administrativa infringida en el ámbito administrativo y para imputar este tipo de ilícitos es requisito obligatorio contar con un informe emanado por la autoridad administrativa correspondiente donde se señale que se ha infringido una norma que regula la actividad ambiental causante del daño al medio ambiente.

En Nicaragua a partir de 1998, por medio de la Ley 290 Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo, se realizaron una serie de cambios, a tal grado que se materializó la separación de dos funciones generales primordiales en materia de Ambiente: la función de formulación y aplicación de políticas y normas ambientales y la función meramente de administración de los recursos naturales.

La función normadora y formuladora de políticas, fue atribuida al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, y otros entes descentralizados, tales como el

Instituto Nicaragüense de Energía, para el caso de los siguientes recursos naturales: Hidrocarburos, Geotermia, Energía Eléctrica. El Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, para el recurso Agua, mientras que la función administradora recayó en los entes administrativos, llámense, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Ministerio Agropecuario y Forestal, por medio de sus dependencias Centralizadas, Descentralizadas y Desconcentradas, siendo éstas, principalmente, el Instituto Nacional Forestal, para el recurso forestal en tierras privadas. ADPESCA, ADAGUAS, ADGEO, ADFOREST, como entidades desconcentradas dependientes del MIFIC, en la administración de Pesca, Aguas, Recursos Geológicos –Minas- y Forestal respectivamente. Además se cuenta con una Dirección General que aplica y administra de forma directa estos recursos naturales, propiedad del Estado.

No de menor importancia es el rol que juega la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, como coadyuvantes de la Gestión Ambiental Nacional, así como la Procuraduría para la Defensa del Ambiente y los Recursos Naturales, como representante legal del Estado, es la encargada de ejercer las acciones y representación del interés público, con carácter de parte procesal, en todos aquellos juicios por infracción a las Leyes ambientales y el Ministerio Público como representante de la sociedad y de la víctima del delito, que es el encargado de conocer y tramitar denuncias por la violación a las disposiciones contenidas en la Ley 559 y otras leyes que establezcan tipos penales ambientales y por supuesto el poder judicial como administrador de justicia.

Dentro del amplia gama de competencias ambientales que nos ofrece la legislación nicaragüense sobresalen mayoritariamente las competencias compartidas, significando que por si solos los gobiernos municipales no pueden mejorar la calidad de vida de sus habitantes ni su desarrollo sustentables o sostenibles de sus municipios, contrario sensu el gobierno central a pesar de ser el director de la planificación general estatal contando con el aparato técnico, burócrata y recursos económicos suficientes, no puede desligarse de la cooperación que le brindan los

gobiernos locales por que estos son los que dan la pauta de la política ambiental que se ve en sus municipios y es la que debe incluirse en los planes nacionales de desarrollo en armonía con los tratados internacionales, por lo que las competencias conferidas a los municipios, deben ser plenamente desarrolladas para cumplir el mismo fin o diferentes formas de actuación como lo expresan diversas corrientes doctrinarias y que se consideran como la forma mas idónea de la actuación en una nación democrática que propugna por la división de poderes.

Significa que las políticas nacionales sobre la preservación del medio ambiente y la explotación nacional de los recursos naturales los dirige el Poder Ejecutivo como autoridad nacional, sin embargo la Constitución y la Ley de Municipios deja un margen, reservando facultades amplias a los municipios para que por si mismos sean garantes del desarrollo sostenible de su circunscripción territorio, por eso establece requisitos indispensables al afirmar que los municipios tienen incidencia en toda actividad que se de en ese municipio y debe ser tomada en cuenta su opinión, es decir no pueden órganos del poder ejecutivos tomar decisiones inconsulta, porque además de violatoria a la constitución y autonomía municipal se esta lesionando los intereses colectivos de esa localidad.

La gestión ambiental nacional se ha constituido un tema de agenda local y prioridad nacional⁴², la Política Ambiental Nacional (2001 - 2005) establece que la gestión ambiental del país se dirigirá a:

- a) Promover un modelo de desarrollo balanceado entre el crecimiento económico y la protección de la biodiversidad, los recursos naturales y la calidad ambiental.
- b) Dar prioridad a la gestión preventiva
- c) Promover la formulación, modernización y armonización continua de la legislación ambiental y garantizar la aplicación de una regulación ambiental eficiente y eficaz.

⁴² Véase Decreto 25-2001, Decreto que establece la Política Nacional del Ambiente y aprueba el plan ambiental de Nicaragua 2001-2005, publicado en la Gaceta diario oficial No.44 de marzo del 2001.

d) Promover el desarrollo y fortalecimiento de los siguientes instrumentos claves para el desarrollo sostenible:

e) El ordenamiento ambiental del territorio:

f) El sistema nacional de información ambiental; La educación ambiental;

g) La descentralización en la gestión ambiental:

h) El Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Naturales.

i) Garantizar el cumplimiento de las estrategias regionales y mundiales de desarrollo sustentable y velar por que las actividades realizadas en el territorio nacional no afectan el medio ambiente de los países vecinos.

j) Promover la valoración y creación de mercados de bienes y servicios ambientales y de los instrumentos para el financiamiento del desarrollo sostenible.

k) Apoyar y propiciar iniciativas que conduzcan a internalizar los costos ambientales promoviendo el desarrollo tecnológico y la producción limpia.

Todos estos lineamientos prioritarios requieren indubitadamente de la participación directa de las Municipalidades.

Existen diversas instituciones en materia ambiental, en la vía administrativa, el MARENA es el principal actor sin embargo, el MINSA, INAFOR, INPESCA, el INE las Alcaldías entre otras ejercen competencias complementarias.

A continuación presentamos un bosquejo de las principales instituciones gubernamentales reguladoras y de protección a la actividad ambiental en nuestro País y las atribuciones en sus respectivas materias:

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales,	Según la Ley 217 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la Ley 290, Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales a través de sus Delegaciones Territoriales es la autoridad competente para conocer tramitar, procesar y sancionar (MARENA).
	en primera instancia, también le corresponde a esta instancia el

recurso de revisión sobre las infracciones administrativas ambientales.

Los casos de apelación los conoce el Ministro del MARENA. En este caso los inspectores del MARENA llevan la parte investigativa del proceso y cuando el caso lo requiere se auxilian de la Policía Nacional y de otras instituciones del Estado.

Las delegaciones territoriales del MARENA, tiene asignada por la Ley 290, Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo, la función de controlar la aplicación del cumplimiento de la normativa ambiental, a si como recibir y atender denuncias relacionadas con la violación a las normativas ambientales. Estas delegaciones cuentan con ventanillas únicas para la atención de denuncias ambientales.

Ministerio de
Energía y
Minas

Al Ministerio de Energía y Minas le corresponde normar las relaciones de las instituciones del Estado con los particulares respecto a la obtención de derechos sobre los recursos minerales de la nación y la de los particulares entre si que estén vinculados a la actividad minera. Art. 1 de la ley 387 Ley Especial sobre exploración y explotación de minas.

Instituto
Nicaragüense
de Energía
(INE)

Conforme el Art. 7 de la Ley No. 277 Ley de Suministro de Hidrocarburos publicada en la Gaceta No. 25 del seis de febrero de 1998 le corresponde al INE recepcionar, dictaminar y otorgar las Licencias de Suministros de Hidrocarburos y las Autorizaciones para construcciones de petroleras así como coordinar la regulación y fiscalización del suministro y comercialización de hidrocarburos con los Ministerios y otras instituciones del Estado entre otras.

La
Procuraduría
para la

En su calidad de abogado y representante del Estado en todas las acciones penales, civiles y administrativas establecidas en el arto 26

Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales	<p>y 27 del Decreto 19 – 2009 y las siguientes relacionadas con la protección y la defensa del ambiente y los recursos naturales, tiene las facultades de:</p> <p>Comparecer ante las autoridades judiciales o de cualquier índole con todos los asuntos que tiene que ver con el medio ambiente y los recursos naturales, ejerciendo todas las acciones para lograr el cese de los actos lesivos y el resarcimiento de los daños.</p> <p>Coordinar y servir de enlace con las instituciones estatales encargadas de velar por el medio ambiente en cuanto el ejercicio de la acciones legales.</p> <p>Establecer coordinaciones con las instituciones pertinentes para la debida investigación de actos que lesionen el medio ambiente.</p> <p>En el caso específico ejercer la acción penal en el caso de las faltas contra el medio ambiente consignadas en el código penal.</p> <p>Aprobación del contenido de la mediación es potestad exclusiva de la Procuraduría General de la República (Ley General del Ambiente, número 217).</p>
Instituto Nacional Forestal (INAFOR)	<p>De conformidad al Art. 7 de la Ley 462 Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal el INAFOR tiene por objeto velar por el cumplimiento del régimen forestal en todo el territorio nacional y tiene entre otras las funciones siguientes: 1.- Vigilar el Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales de la Nación. 2.- Ejecutar la política de desarrollo forestal de Nicaragua. 3- Aprobar los permisos de aprovechamiento y conocer, evaluar y fiscalizar los planes de manejo forestal.</p>
Ministerio de Salud (MINSA)	<p>Las atribuciones del MINSA están conferidas en la Ley General de Salud Ley No. 423 aprobada el 14 de marzo del 2002 especificándose en el Arto. 2 de dicha ley que El Ministerio de Salud es el órgano competente para aplicar, supervisar, controlar y</p>

evaluar el cumplimiento de la Ley General de Salud y su Reglamento; así como para elaborar, aprobar, aplicar, supervisar y evaluar normas técnicas, formular políticas, planes, programas, proyectos, manuales e instructivos que sean necesarios para su aplicación y en el art. 4 de la citada ley se expresa que le Corresponde al Ministerio de Salud como ente rector del Sector, coordinar, organizar, supervisar, inspeccionar, controlar, regular, ordenar y vigilar las acciones en salud, sin perjuicio de las funciones que deba ejercer frente a las instituciones del sector salud.

16. Conclusiones

- I. Se ha ampliado mecanismos jurídicos para la protección de los recursos naturales dado los efectos y secuelas que esta generando la depredación ambiental por lo cual, administrativa y penalmente se han creado instituciones que tengan capacidad tanto investigativa como sancionadora para dar una respuesta a la sociedad cuando se ve afectada por un deterioro a los elementos del medio ambiente.
- II. Se están creando diversos programas y actividades de capacitación, ejecución y educación ambiental dirigida a la población en general por parte de las instituciones gubernamentales para divulgar las leyes que sancionan conductas ilícitas ambientales.
- III. La legislación ambiental de Nicaragua se caracteriza por ser abundante, dispersa y en constante evolución, lo que ha dificultado una correcta aplicación de la misma, por lo que las instituciones involucradas en la defensa del Medio Ambiente se deberán mantener en constante y continuo estudio y capacitación de los temas ambientales, fomentando comisiones de trabajo interinstitucional para un mejor manejo y aplicación de estas normas.
- IV. A las instituciones gubernamentales se les han otorgado competencias en materia ambiental, que muchas veces se observan roces entre dicha instituciones o sus normativas por lo que es, lo recomendable en este sentido

suscribir convenios o acuerdos interinstitucionales con absoluta claridad para establecer de manera precisa cuales son las competencias de cada institución.

- V. Existen algunas competencias gubernamentales que están dirigidas hacia acciones meramente consultivas, y no precisamente a decisorias, como por ejemplo: el aval, Emisión de Opinión, Consultas, etc., esto debe ser reformado y se debe establecer de manera clara si hay aprobación o no de una petición, sin se cumplen los requisitos o no de un proyecto, ya que los resultados de esas actividades que se pretenden autorizar afectan a toda una colectividad.
- VI. En algunas instituciones gubernamentales la protección del ambiente es un elemento que no se toma con la beligerancia y urgencia que se requiere debido a que el funcionario no tiene la competencia, el conocimiento o perfil personal para desempeñarse en el cargo donde debe brindar sus servicios en beneficio del medio ambiente patrimonio de la colectividad.
- VII. Los ilícitos ambientales son delitos sociales dado que afectan las bases de la existencia social económica, atentan contra las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, pone en peligro las formas de vida autóctonas en cuanto implican destrucción de sistemas de relaciones y las instituciones que investigan tales conductas a pesar de sus limitaciones tanto de logística, de técnica, de recursos humanos, equipamiento u otros, hacen esfuerzos para obtener resultados positivos en el esclarecimiento de los hechos investigados.
- VIII. Por la complejidad y características multidisciplinaria de los casos donde se denuncian delitos ambientales se ha hecho necesario que las instituciones gubernamentales reguladoras de los recursos naturales interactúen con las instituciones investigadoras de dichos ilícitos (Policía Nacional, Ministerio Publico) para proporcionarles a estas ultimas elementos técnico científicos imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos.

17.- Recomendaciones

- I. Impulsar de manera coordinada, didáctica y practica el estudio de los delitos ambientales en las facultades de Derecho a fin de que los profesionales del Derecho estén capacitados para resolver casos donde se investiguen acciones que causen efectos adversos al medio ambiente, puesto que van en aumento los casos que por conflictos ambientales se están resolviendo en la vía jurisdiccional dado los efectos y secuelas que el mundo actual está sufriendo por la acción del hombre.
- II. Formar equipos de trabajo entre las Instituciones del Estado relacionadas a la preservación y protección del Medio Ambiente para que los funcionarios técnico especializados en las distintas ramas ambientales tengan un conocimiento básico del procedimiento penal por cuanto dichos funcionarios son los que han de comparecer a juicio en calidad de testigos o peritos y de esta manera lograr el esclarecimiento de los hechos con un soporte científico jurídico.
- III. Debe capacitarse a defensores públicos, litigantes, fiscales y asociaciones de abogados a fin de que todos se inmiscuyan en la problemática ambiental de nuestro país y en conjunto se den repuestas y planteamientos acordes con los principios de derecho ambiental, haciéndose especial énfasis en la solución alterna de los conflictos ambientales a través de los principios de oportunidad que establece la legislación procesal penal.
- IV. Procurar coordinaciones estrechas entre las distintas instituciones del Estado, Municipalidades, Ministerio Publico y Policía Nacional como entes encargados de la aplicación de las leyes ambientales en temas de gran trascendencia y repercusión a nuestro medio ambiente para estar preparados ante tipos penales que causen grave impacto al medio ambiente y con ello tener el equipo material y humano necesario para la investigación de dichos ilícitos.
- V. Brindar capacitaciones a las Autoridades Judiciales acerca de lo que implica un delito ambiental como un nuevo tipo penal en nuestra legislación para

que al dictar una sentencia exista un sustento jurídico acorde a los planteamientos establecidos doctrinalmente en la legislación ambiental moderna y que las partes procesales obtengan una respuesta acorde con los principios de legalidad y debido proceso.

- VI. Fomentar el desarrollo de los instrumentos de gestión ambiental preventivos, cuya competencia este atribuida a las instituciones gubernamentales y gobiernos locales, ejemplo: formularios ambientales, comanejo de áreas protegidas, declaratoria de parques ecológicos municipales, ordenamiento territorial, programas de educación ambiental, entre otros.
- VII. Una intervención más eficaz de los órganos del Estado para la aplicación del derecho ambiental nicaragüense, logrará un mejor manejo, protección y administración de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, así como la respectiva sanción penal a aquellas personas que causen daños al medio ambiente que estén tipificados como delitos.
- VIII. Se deben hacer esfuerzos en el Poder Judicial para buscar mecanismos por medio de los cuales se contribuya a la creación de juzgados ambientales para que las causas que se ventilen por delitos ambientales sean conocidas por jueces especializados en la materia ambiental y de esta manera obtener fallos adecuados a los principios del Derecho Ambiental y a la necesidad de la protección efectiva de los recursos naturales como bien de toda la colectividad.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR ROJAS, Grethel/ ALEJANDRO Iza, *Derecho Ambiental en Centroamérica*, Tomo I y II, San José, Costa Rica, Editorial Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), Gland, 2009.

BRAÑEZ, Raúl. *Manual de Derecho Ambiental Mexicano*, México, México, Editorial Fundación Mexicana para la Educación Ambiental – Fondo de Cultura Económica 1994.

BRAVO, Alejandro. *Derecho Local en Nicaragua*, Managua, Nicaragua, Edición AMUNIC, 2da edición 2001.

BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, *Derecho Ambiental, Fundamentación y Normativa*, Editorial Abeledo Perrot 1997.

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, *Diccionario Jurídico Elemental*, Editorial Heliasta S.R.L. Segunda edición, Buenos Aires, 1982.

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, *Diccionario Enciclopédico de derecho usual*, Editorial Heliasta S.R.L. 28ª edición, Buenos Aires, 2003.

CRUZ MARTINEZ, Esteruelas, *Diccionario jurídico*, Madrid, España, Editorial Espasa Calpe, S.A. 1999.

DEL GATTO, Filippo, *Manual de monitoreo forestal independiente para comunidades y sociedad civil de Centroamérica*, Asociación coordinadora indígena y campesina de agroforestería comunitaria centroamericana. San José, Costa Rica, 2009.

EMBRID IRUJO, Antonio, *Autonomía Municipal y Constitución*, aproximación al concepto y significado de la declaración constitucional de la autonomía municipal, revista española de Derecho administrativo (REDA), núm. 30 (1981).

ESCORCIA JORGE, Flavio. *Municipalidad y Autonomía en Nicaragua*, León, Nicaragua Editorial UNAN – León, 1999.

FERREIRO LAPATZA, Juan José. *Manual de Derecho Tributario Local*, Barcelona, España Editorial Generalitat de Catalunya, Escola d'Administració pública de Catalunya, 1987.

FRAGA, Gabino. *Descentralización por Región*, Editorial Porrúa, México, México 1993.

FRAGA, Gabino. *Derecho administrativo*, Editorial Porrúa, México, México 1962.

GÜNTHER, Maihold. *Descentralización, De la Delegación de Servicios a la Transferencia de Competencias*, Fundación Friederih Ebert, Editorial El Amanecer, 1992.

HERNÁNDEZ, Munguía/ **JAVIER**, Guillermo/ **GONZÁLEZ**, Pastora, *Manual de legislación ambiental Nicaragua, Managua Nicaragua*, Asociación Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), 2003.

JULIO CASTILLO, Vargas, *Compendio jurídico forestal de Nicaragua 1998-2008*, 2da. Edición. 2008.

LLISET BORREL, Francisco, *Manual de Derecho Local*, Madrid, España, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 3.ª ed., 2001.

LÓPEZ BUSTOS, Francisco Luís. *La Organización Administrativa del Medio Ambiente*, Madrid, España, Editorial Civitas. 1992

MARTÍN MATEO, Ramón. *Tratado de Derecho Ambiental*, Volumen 1, Madrid, España, Editorial Trivium S.A. 1997.

MERLO FAELLA, Ricardo, *Conceptos generales de Derecho Penal Ambiental*, Editorial Intercontinental, Asunción Paraguay, 2000.

PAREJO ALFONSO, Luciano, *La Autonomía Local*, revista española de administración local y autonomía (REALA). núm. 229.1986.

POLAINO NAVARRETE, Miguel, *El bien jurídico protegido en el derecho penal*, publicaciones de la Universidad de Sevilla, serie Derecho No. 19, Sevilla España, 1974.

QUINTANA ROLDAN, Carlos. *Manual de Derecho Municipal*, México, México, Editorial Porrúa, 1997.

SAINZ DE BUJANDA, Fernando. *Lecciones de Derecho Financiero*, Madrid, España, Editorial de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 1993.

SCHWARTZ CUNNINGHAM, William, *Consultas jurídicas en materia forestal respuestas y comentarios 2007-2009*. Managua, Nicaragua, 2010.

TIJERINO PACHECO, José María. *La acción procesal penal y la acción civil en sede penal en el código procesal penal nicaragüense de 2001*.

URQUIJO, María Victoria. *La Gestión Ambiental*, Consultora para aspectos legales y de desarrollo institucional Proyecto PROTIERRA y CBA, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) 2001.